

¿DEL “POLO MARGINAL” A LA “ECONOMÍA ALTERNATIVA”?*

Con la cuestión de la “marginalidad” se debatía, sobre todo, lo que ocurría con el trabajo y los trabajadores dentro de las nuevas tendencias del capital. La cuestión central de aquella problemática era la relación capital-fuerza de trabajo. Para un sector de los investigadores, el empleo asalariado era el problema principal y desde ese punto de vista, el lugar de los trabajadores sin empleo respecto del capital. Ese era, sobre todo, el sentido de la propuesta de Nun sobre la “masa marginal”. Pero ese era también su límite y su dificultad.

La propuesta alternativa de “polo marginal” del capital, significaba ya un primer momento de rebasar los límites de dicha problemática, de no quedarse en los límites del problema del empleo, al introducir la idea de que las actividades de los des y sub empleados, tendían a

constituir un complejo entero de actividades económicas, de formas de organización, de uso y nivel de recursos y de tecnología y de productividad.

Ese complejo, constituido dentro del poder capitalista (ciertamente era su “polo marginal”), tenía sin embargo una característica peculiar: el personaje central no era el capital, sino el trabajo. Esto es, organizado sin capitalistas, y sin empresas. Eso dejaba abiertas ciertas cuestiones mayores: ante todo, el tipo de relaciones sociales que se constituían, o tendían a ello, en el “polo marginal” y en general en el “mundo de la marginalidad”; y luego, las relaciones entre tal “polo marginal” y el conjunto del poder capitalista.

Aunque, como lo hiciera notar Larissa Lomnitz¹, la reciprocidad fue ya entonces sugerida

* Publicado en Quijano, Aníbal 1998 *La economía popular y sus caminos en América Latina* (Lima: Mosca Azul Editores / CEIS-CECOSAM) pp. 109-192.

1 “Larissa Lomnitz 1978 “Mechanisms of articulation between shantytown settlers and the urban system” en *Urban Anthropology*, 7 (2) pp. 185-206. Se refería, ob-

da como parte integrante del “polo marginal” y como indispensable en toda la explicación de la capacidad de producción, intercambio y reproducción (esto es, de la capacidad de sobrevivencia y de reproducción de los “marginalizados”) en una franja la economía donde los recursos eran de una precariedad tan extrema. La cuestión no fue entonces realmente estudiada y discutida.

Un par de décadas más tarde, una documentación extensa produce una imagen distinta: los esfuerzos de los trabajadores “marginalizados” por resolver sus problemas de sobrevivencia, y en consecuencia por motivaciones de eficacia práctica, se han ido orientando en muchos casos, y su número parece ir en aumento, a fortalecer y a expandir las relaciones económicas de reciprocidad o intercambio de fuerza de trabajo y/o de trabajo sin pasar por el mercado; a organizarse colectivamente de modo “comunal”, en lugar de empresarial, para gestionar

viamente, a “La constitución del ‘mundo’ de la marginalidad urbana”. El texto, escrito en abril de 1969, fue originalmente difundido en *EURE*, revista de Universidad Católica de Chile, en ese mismo año, y en *Espacios et Societés*, N° 1, 1971. Está incluido en Quijano, Aníbal 1977 *Imperialismo y Marginalidad en América Latina* (Lima: Mosca Azul Ediciones) pp. 192-227.

adecuadamente sus recursos, sus productos, sus relaciones en el mercado y con los otros sectores de la economía y de la sociedad.

Eso no niega la presencia del “polo marginal”, ni de la “pequeña producción mercantil”, ni de la “microempresa” establecida por trabajadores que tratan de convertirse en capitalistas, ni de capitalistas que organizan empresas “informales” o usan para una parte de sus intereses “formales” el espacio “informal”. Establecer las dimensiones, las características propias y las relaciones entre todos estos campos de actividad económica, es una tarea que aún falta proseguir.

LAS “ORGANIZACIONES ECONÓMICAS POPULARES” (OEP)

Las “organizaciones económicas populares” son un conjunto heterogéneo de organizaciones formadas entre “pobladores”², especial-

2 El término de “pobladores” fue acuñado en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, para nominar a los que levantaban viviendas precarias en los “márgenes” de las ciudades, en tierras que “invadían” para “poblar”. La mayoría de dichos “pobladores” eran y son migrantes, pero la proporción de los no-migrantes

mente, pero que comparten un rasgo: son organizaciones de tipo comunitario. La denominación de “organizaciones económicas populares” (oep, en adelante) ha sido propuesta por grupo de investigadores chilenos agrupados en un proyecto denominado Programa de Economía del Trabajo (PET).

El grupo formado por Luís Razeto y sus asociados propone la siguiente tipología de dichas organizaciones³:

1. Los talleres laborales.
2. Las organizaciones de cesantes.
3. Las organizaciones para el consumo básico.
4. Las organizaciones para problemas habitacionales.
5. Las organizaciones poblacionales de servicios.

ha ido creciendo. Como resultado existen ahora “poblaciones” de ese tipo, con diferentes nombres: barriadas, asentamientos humanos, urbanizaciones populares, favelas, villas-miseria, poblaciones clandestinas o escondidas, etc. El término “poblador” se emplea como toda una categoría social en los estudios sobre los sectores pobres que habitan en esas áreas de ciudades latinoamericanas. Chile es, seguramente, el país donde esa palabra tiene mayor circulación en esa literatura.

3 Razeto, Luis *et al.* 1990 *Las organizaciones económicas populares, 1973-1990* (Santiago de Chile: Ed. Programa de Economía del Trabajo) pp. 53-70.

Los “talleres laborales” son “pequeñas unidades económicas cuya actividad central es la producción y comercialización de bienes y de servicios”, cuyos miembros varían entre 3 y 15 personas. Trabajan en “condiciones igualitarias”, con cuerpos directivos elegidos y controlados directamente, con asignación individual de responsabilidades y de tareas. Usan recursos limitados, tienen calificaciones simples, y la división de trabajo es simple. Producen a pedido y/o por cuenta propia, pero en todo caso para el mercado⁴.

Las “organizaciones de cesantes” se organizan en su condición de “desocupados” para tratar de obtener empleo. Pueden funcionar eventualmente como coordinadoras de ese esfuerzo y como agencias de empleo. Las indicaciones acerca de su organización son escasas, pero se trataría, de todos modos, de formas comunitarias de asociación y de autoridad.

Las “organizaciones para el consumo básico” se dedican a la obtención de alimentos y de recursos de uso y de consumo indispensables. Funcionan, con diversos nombres, como

4 Véase de Hardy, Clarisa 1986 *Talleres artesanales de Conchalí* (Santiago de Chile: PET). Y de Egaña, Rodrigo 1986 *De Taller a Empresa de Trabajadores* (Santiago de Chile: PET).

colectivos de preparación y servicio de alimentos, “ollas comunes”⁵, “comedores populares”; de provisión de recursos, “comités de abastecimiento”; colectivos de compra, para abaratar el precio de las subsistencias, “comprando juntos”, “bodegas populares”; “huertos familiares”, “mini granjas”, “grupos de autoayuda”.

Las “organizaciones para problemas habitacionales”, que son “comités de sin casa”, que buscan tierra para poblar; “grupos pre cooperativos”, que buscan comprar juntos y abaratar el precio de terrenos o “sitios” para habitar; y, comités para obtener agua, luz y otros servicios⁶.

Finalmente, las “organizaciones poblacionales de servicios”, se agrupan para atender colectivamente problemas de salud, de educación, de recreación, etc., a veces por categorías

de género y/o de edad, como los jóvenes, los pensionados, las mujeres⁷.

Razeto y sus asociados insisten que estas experiencias son marcadas por una conciencia de solidaridad; que no se agotan en las necesida-

7 Una clasificación paralela es propuesta por otra de las investigadoras del PET, Hardy, Clarisa 1987 *Organizarse para vivir: pobreza urbana y organización popular* (Santiago de Chile: PET). Pero, como se ve, no modifica en lo sustancial la clasificación original de Razeto y sus asociados.

1. Organizaciones laboral-productivas
 - a. talleres solidarios
 - b. talleres de sindicatos territoriales
 - c. talleres por rama
 - d. “amasanderías” (panaderías)
2. Organizaciones para el consumo
 - a. huertos familiares
 - b. comedores populares
 - c. ollas comunes
3. Organizaciones de servicios sociales
 - a. de vivienda y deudas
 - b. de salud
4. Organizaciones laboral-reivindicativas
 - a. sindicatos territoriales de trabajadores independientes
 - b. sindicatos por rama, de trabajadores independientes.

5 Véase de Hardy, Clarisa 1986 *Hambre, dignidad, ollas comunes* (Santiago de Chile: PET), Para una minuciosa presentación de las características y actividades de esas organizaciones en Chile. También, de Gallardo, Bernarda 1987 “El redescubrimiento del carácter social del hambre: las “ollas comunes” en *Espacio y Poder. Los Pobladores* (Santiago de Chile: FLACSO) pp. 171-201.

6 Ver Sánchez, Daniela 1987 “Instituciones y Acción Poblacional. Surgimiento de su acción en el período 1973-1981” en *Espacio y Poder. Los Pobladores* (Santiago de Chile: FLACSO) pp. 123-169.

des económicas, sino que se dirigen a enfrentar las necesidades integrales de la existencia de sus miembros. Y proponen admitir esas organizaciones como señal de la emergencia de toda una “economía alternativa” a la del capital, precisamente en base a esos rasgos de solidaridad consciente; de comunalidad de las formas de asociación y la orientación hacia la solución de las necesidades integrales⁸.

Otros estudiosos, de las mismas organizaciones, reconocen su importancia y su amplitud entre los “pobladores”; pero son más cautos en sus propuestas⁹. Sobre todo, ellos convergen

8 Además del texto citado, véase también de Razeto, Luis 1986 *Economía Popular de Solidaridad* (Santiago de Chile: Área Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile).

9 Entre los principales, Campero, Guillermo 1987 *Entre la sobrevivencia y la acción política* (Santiago de Chile: ILET); Hardy, Clarisa 1989 *La ciudad escindida* (Santiago de Chile: PET); Tironi, Eduardo 1986 “La revuelta los pobladores” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 83; Baño, Rodrigo 1985 *Lo social y lo político* (Santiago de Chile: FLACSO); Espinoza, Vicente 1986 *Tendencias del movimiento poblacional* (Santiago de Chile: SUR); Espinoza, Vicente *et al. sf* “Poder local, pobladores y democracia” en *Proposiciones* (Santiago de Chile: SUR) N° 12; Oxhorn, Philip 1986 “Democracia y Participación Popular. Organizaciones populares en la futura democracia chilena” *Contribuciones* (Santiago de Chile: FLACSO) N° 44.

en percibir las tensiones entre prácticas comunitarias y un individualismo muy acentuado.

De un lado, las organizaciones comunitarias se forman entre pobladores territorialmente vecinos. Esto es, son organizaciones vecinales. Se desarrollaron en Chile principalmente desde 1983, en un momento de crisis muy grave, para tratar de solucionar necesidades vitales. Pero una vez constituidas, actúan como una base o como un principio de identificación.

Esa idea de que la acción comunitaria actúa como un “principio de identificación” es compartida por virtualmente todos los que estudian esas organizaciones. Según eso, el grupo se ve o tiende a verse como algo más que un instrumento de solución de problemas prácticos y materiales, inmediatos. La acción comunitaria pasaría a ser percibida como una conquista, como un motivo de realización, estímulo de acciones e iniciativas. Saball y Valenzuela señalan que en esas instituciones actúa una “lógica comunitaria”¹⁰.

Sin embargo, no todas las organizaciones de ese tipo tienen igualmente intensa esa “lógica comunitaria”. Solamente las que permanecen por la exigencia misma de las necesidades.

10 Saball, P. y Valenzuela, E. 1985 *La acción comunitaria* (Santiago de Chile: SUR).

Como Tironi y Campero señalan, no se trata de que una ética comunitaria sea la que mueve a los “pobladores” a ese tipo de asociaciones; son más bien las necesidades prácticas urgentes, que no pueden ser resueltas o enfrentadas inmediatamente de otro modo. Pero en la medida en que esas necesidades materiales no se resuelven del todo, la asociación misma se convierte en un modo simbólico, imaginario, de compensarlas. Eso hace decir a Campero que ese tipo de organizaciones son más bien “instituciones compensatorias”¹¹. Aunque, por otro lado, Tironi admite que la organización comunal es, quizás, una manera de protegerse contra la desintegración social y podría ser también interpretada como un modo de rechazo a un tipo de modernización por el mercado que la dictadura militar impulsaba¹².

Esa clase de organizaciones de tipo comunal no son estrictamente nuevas en Chile. Tenían una presencia extendida desde la década de los sesenta, por acción de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular, sobre todo, en los problemas de ocupación de terrenos ur-

banos para poblar y en la presión para conseguir servicios urbanos. La DC, en el gobierno desde 1964, había establecido en esa época la política de la “promoción popular” y de la “participación popular”, y las “juntas de vecinos”, “clubes de madres” y “asociaciones de pobladores” se formaron como parte de esa política, en buena parte de las poblaciones urbanas llamadas “marginales”.

Aquellas organizaciones, a diferencia de los sindicatos, no reivindicaban salario y condiciones de empleo sino, principalmente, tierra para poblar y servicios urbanos. Había, pues, una vasta y prolongada experiencia de organización entre ese sector de la población urbana. Desde 1973, fecha del golpe de Pinochet, pero sobre todo desde 1983, cuando se inicia la movilización callejera contra la dictadura, en el momento de una muy grave crisis económica, esa experiencia organizativa se volcó hacia los problemas del empleo, del ingreso, del hambre y de vivienda.

Con todo, lo que sin duda es significativo es el hecho de que superada la fase mayor de la crisis en Chile, las organizaciones comunales no se hayan disuelto, sino que hayan continuado extendiéndose. Según el PET, para fin de la pasada década, sumaban cerca de 2 mil organizaciones solamente en el Gran Santiago, con 50

11 Campero (1987) p. 69, *op.cit.*

12 Tironi, H. E. 1986 “La revuelta de los pobladores” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 83.

mil miembros activos y otras 200 mil personas vinculadas a ellas. Esto es, un 15% de una población calculada en 1.317.238 personas¹³. Ahora, para presionar por la solución de problemas más permanentes: servicios sociales (salud, educación, vivienda) que fueron severamente reducidos bajo la dictadura. Y se han mantenido las que ya existían, especialmente, los “talleres laborales” las “juntas de vecinos”, los “centros de madres”, los sindicatos de facto, y se han establecido organismos de coordinación, por tipos de organización y por áreas territoriales¹⁴.

Ese tipo de organizaciones existe también en otros países. El Perú es, probablemente, uno de sus escenarios más ilustrativos. Allí, donde la tradición de la reciprocidad y la comunidad es más prolongada y, sin duda más viva, ese tipo de organizaciones forma una red extendida en todo el país. Sus principales denominaciones locales son, principalmente, los “comedores populares”, los “comités del vaso de leche”, las “ollas comunes”, las cuales son caracterizadas por la reciprocidad y la comunidad.

Hay, sin embargo, también las “asociaciones de vendedores ambulantes”, los “microtalleres

productivos”, las “asociaciones de microempresarios”, y las “pequeñas empresas autogestionarias”, las que no tienen carácter comunal, ni se fundan en la reciprocidad, sino de modo muy parcial. El calificativo de “autogestionarias” para ese tipo de organizaciones, deriva aparentemente del hecho que sus miembros son, generalmente, ex trabajadores asalariados, despedidos o renunciando de empresas, muchos de los cuales han invertido sus “indemnizaciones” (dinero recibido como compensación por tiempo de servicio, al término del empleo), para iniciarse como pequeños empresarios, individualmente o en grupo. Algunos autores han comenzado a usar la misma fórmula acuñada por el PET¹⁵, para denominar, también en el Perú, ambos tipos de organizaciones. La terminología se ha hecho más equívoca.

Las “ollas comunes” son en todas partes una práctica de los trabajadores, de cocinar y de comer en grupo. Generalmente se formaban cuando una huelga se hacía prolongada y no parecía tener visos inmediatos de solución, lo que acarrea dificultades alimenticias en

13 Razeto *et al.* (1990) *op. cit.* Y Hardy (1989) *op. cit.*

14 Hardy (1989) *op. cit.*

15 Ortiz, Humberto 1990 “Las organizaciones económicas populares” en *Creación popular de la sociedad. Autogestión y autogobierno en el Perú* (Lima: Democracia y Socialismo) pp. 43-51.

tre las familias de los huelguistas, obligando a cocinas y comedores colectivos, con frecuencia en lugares públicos. Y eso era también una manera de hacer visible la situación para el público, como un recurso de presión sobre los patrones y/o el Estado. Al hacerse graves y estables el desempleo y la carencia de ingresos, esas prácticas se han hecho más comunes y más frecuentes entre los habitantes de los barrios pobres. No son, sin embargo, instituciones estables, no dan lugar a relaciones que se reproducen y a roles definidos. Tienen un carácter más bien coyuntural.

Los “comedores populares” y los “comités del vaso de leche” son más regulares. En el caso peruano, su origen se remonta a la crisis de los años treinta, época durante la cual el Estado, las parroquias u otras instituciones de beneficencia pública, organizaron comedores colectivos llamados “comedores populares”, para los desocupados urbanos y proveyeron de desayuno en algunas escuelas de niños pobres, con el nombre de “gotas de leche”. Esas prácticas, sin embargo, estaban entonces bajo la administración y el control de aquellas instituciones públicas, fuera de la iniciativa y del control de los usuarios y consumidores. Persistieron durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, en Lima, sirviendo a desem-

pleados, trabajadores con muy bajos ingresos, e inclusive estudiantes.

Bajo la crisis de comienzos de los años setenta, los “comedores populares” comenzaron a formarse en las “barriadas”, bajo la administración directa de sus usuarios, si no siempre por su iniciativa. Al profundizarse la crisis en la década siguiente, se han convertido en instituciones estables, con núcleos de personas organizadas, con cierta división de roles, en donde la reciprocidad y la gestión comunal tienen un lugar central. Actualmente, se estima que funcionan alrededor de mil “comedores populares” en el país, cada uno de los cuales produce y sirve un promedio de 150 a 200 raciones diarias, generalmente a la hora de la comida del mediodía (almuerzo, en el lenguaje peruano). Una parte de esos núcleos se coordinan entre sí, en cada barriada y a escala de toda la ciudad.

Los “comités del vaso de leche” son más recientes. Se formaron bajo el gobierno municipal de la Izquierda Unida, en Lima, entre 1983 y 1987. Funcionaron masivamente durante ese período y se convirtieron en una red institucional que agrupaba a unas 100 mil personas en Lima Metropolitana, todas mujeres, con apoyo financiero internacional y con el aprovisionamiento y la asesoría del Municipio de Lima bajo gestión de la IU, que formó para ese propósito

la institución llamada FOVIDA (Fomento de la vida) y con el apoyo de las organizaciones políticas de ese frente político. Desde entonces operan más restrictamente, haciendo frente a la hostilidad de las nuevas autoridades municipales, pero todavía con apoyo financiero internacional relativamente importante¹⁶.

Los “microtalleres” son agrupaciones de producción mercantil en pequeña escala, cuyos propietarios actúan también como administradores y trabajadores, y que se dirigen explícitamente a producir para el mercado y, si es posible, acumular capital. Muchos de esos talleres son efectivamente pequeñas empresas, con asalariados, aunque los propietarios-administradores suelen también trabajar ellos mismos y con sus familiares, a los que no pagan salario. La combinación entre esas varias formas de trabajo en una sola unidad o taller, parece ser muy frecuente, pero no existe documentación eficaz acerca de eso. Es más frecuente en la información disponible, encontrar unidades de “pequeña producción mer-

cantil”, formadas por familias y/o con pocos asalariados. No existe documentación acerca de núcleos que se fundan exclusiva o principalmente en la reciprocidad y la comunidad más allá de las familias¹⁷. Parecería así, curiosamente, que la reciprocidad y la comunidad son más frecuentes entre los “pobladores” de Chile. Pero esa es una cuestión que requiere estudios más precisos.

Las llamadas “empresas autogestionarias” y “empresas administradas por trabajadores”

17 En una reciente investigación en Villa El Salvador (VES), la más importante y famosa de las experiencias peruanas de autogobierno y de autogestión comunal de ciertas actividades económicas del período anterior, no se ha encontrado información eficaz acerca de la actual presencia de núcleos de reciprocidad y de comunalidad en la producción o en el comercio, más allá de los límites de las familias, pero sí de la extensión de los núcleos que agrupan a miembros de la misma familia. El Parque Industrial, que fue antes organizado para la Producción industrial en VES, bajo la gestión comunal del Consejo Comunal de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), ha sido deliberadamente reorganizado por el actual gobierno nacional y local en una asociación de pequeños y medianos empresarios. Sobre estas organizaciones en Lima, también de Pait Volstein, Sara 1990 “Micro y pequeños talleres productivos” en *Creación popular de la sociedad. Autogestión y autogobierno en el Perú* (Lima: Democracia y Socialismo) pp. 37-43

16 Una sistemática discusión de las experiencias de los “comedores populares” y de los “vasos de leche” se encuentra en: Galler, Nora y Núñez, Pilar (comp.) 1989 *Mujer y Comedores Populares* (Lima: SEPADE). También puede verse Ortiz (1990) *op. cit.*

aparecieron bajo el gobierno militar del período 1968-1980, sobre todo bajo el régimen del general Velasco Alvarado. Hay una literatura más o menos amplia sobre sus experiencias. Se construyeron por la iniciativa del Estado, en algunos casos por las motivaciones ideológicas de algunos de los organismos políticos del régimen, que pretendían replicar en el Perú la experiencia de la autogestión en Yugoslavia. Sobrevivieron algunas, con variadas medidas de éxito, a la retirada del gobierno militar en 1980. Las que lograron organizarse como empresas reales, con recursos financieros y tecnología útil, han sido muy pocas y, en todos los casos, no tienen nada que ver con el discurso de la autogestión. Así lo reconoce, algo melancólicamente, uno de sus ideólogos y estudiosos: “Hay algunas cuantas empresas que han tenido un relativo éxito económico-financiero, aunque frecuentemente a costa de su calidad autogestionaria y sin llegar a ser éxitos rotundos”¹⁸. Las

18 Scurrah, Martin “Las posibilidades de autogobierno en la industria nacional” en *Creación popular de la sociedad. Autogestión y autogobierno en el Perú* (Lima: Democracia y Socialismo) pp. 21-29. Del mismo autor, véase también: “The experience of worker self-management in Peru and Chile” en Annis, Sheldon y Hakim, Peter (comps.) 1988 *Direct to the Poor* (Boulder: Lynne Rienner) pp. 132-453. Estudios detallados sobre

otras, afiliadas a la Central de Empresas Administradas por Trabajadores (CEAT), cuando han logrado sobrevivir, lo hacen en malas condiciones, para defender el empleo real. Pero en esos casos “la calidad de la democracia al interior de esas empresas ha sido variable y pocas de ellas han logrado desarrollarse empresarialmente”.

La experiencia de esas “empresas autogestionarias” o “administradas por sus trabajadores” no ha sido, sin embargo, desprovista de interés para el futuro. En Chile se iniciaron bajo el gobierno de Eduardo Frei, con el apoyo crediticio del Estado y el apoyo técnico del Servicio de Cooperación Técnica, organismo estatal, y se extendieron bajo el gobierno de Salvador Allende, cuando varias empresas fueron estatizadas y otras pasaron a poder de sus trabajadores. Bajo el golpe militar de 1973, algunas de las empresas estatizadas fueron adquiridas

las experiencias equivalentes en los diversos países latinoamericanos, especialmente en Bolivia, Chile y Perú, se encuentran en la compilación de Iturraspe, Francisco 1986 “Participación, cogestión, autogestión en América Latina” en *Nueva Sociedad* (Caracas) 2 Vols. También en Roca, Santiago (comp.) 1981 *La autogestión en América Latina y en el Caribe* (Lima: CLA e IICA). También puede verse de Quijano, Aníbal 1991 “Poder y crisis en América Latina” en *Páginas*, N° 109: 40-60, junio.

por los trabajadores con el apoyo crediticio de la Iglesia y de los restos del Servicio de Cooperación Técnica, que se había formado desde los años sesenta. Pero, poco después las dificultades financieras, de mercado y de administración fueron excesivas para esas empresas. Su dependencia del apoyo externo, crediticio y técnico, que fue su marca de nacimiento, fue también el elemento central de su desintegración. Lo mismo ocurrió en el Perú después del reemplazo del régimen velasquista¹⁹.

La documentación acerca de otros países parecería indicar que las “empresas autogestionarias” no son una experiencia frecuente, lo mismo que las organizaciones fundadas en la reciprocidad y la comunidad entre los trabajadores de las ciudades. En cambio, las organizaciones cooperativas y comunales en los medios rurales son una experiencia relativamente frecuente.

En el caso de Colombia, por ejemplo, la experiencia de las “bodegas comunales” o “alma-

cenés comunales” es una de las más ilustrativas. Algunos de ellos se formaron de modo espontáneo y operan independientemente desde los setenta. Pero son casos excepcionales. La generalidad se formó por iniciativa de la Iglesia Católica, junto con las organizaciones sindicales del campesinado. Especialmente en los valles del Cauca y del Magdalena. Se constituyeron redes de distribución comercial patrocinadas por la Iglesia (Grupo Asociativo Versalles y CEMECAV, en el Cauca; FUNDER, en el Magdalena; FUNDACOMUN, Acción Comunal y COINCA, en Risaralda), especialmente a través del Instituto Campesino Avanzado, dirigido por los jesuitas.

Los estudios señalan que los propósitos sociales y los económicos, empresariales, no resultaron compatibles. Pero, sobre todo, que sin el apoyo, la asesoría y aún el control de las instituciones de la Iglesia, esos “almacenes comunales” no sobreviven o se convierten en empresas privadas de algunos de los miembros originales²⁰.

De otro lado, las organizaciones de tipo cooperativo y de tipo comunitario organizadas

19 Una de esas experiencias es recontada en Scurrah, Martín y Podestá, Bruno 1988 “The experience of worker self-management in Perú and Chile” en Annis y Hakim (1988) pp. 132-154, *op. cit.* Para una evaluación del significado político de esas experiencias, ver mi texto “Poder y Crisis en América” ya citado.

20 Butler Flora, Cornelia *et al.* 1988 “Community Stores in Rural Colombia. Organizing the means of consumption” en Annis y Hakim (1988) pp. 117-131, *op. cit.*

para la producción en el Campo colombiano, que durante un momento parecieron generalizarse como una experiencia estable, han tenido en general los mismos resultados. Un estudio específico llevado a cabo sobre el conjunto de ellas, a escala nacional, da cuenta de eso²¹.

En su periodo de auge, hasta 1974, llegaron a sumar unas 1.300 organizaciones con unas 15 mil familias y 320 hectáreas de tierra. Hacia 1985, sólo quedaban 629 organizaciones, las familias habían disminuido en casi 76% y la tierra en cerca de 66%. Las asociaciones sobrevivientes, no parecen tener vitalidad para perdurar: “la renta generada por 30 hectáreas de tierra no supera como término medio un salario mínimo”, informa el estudio.

Solamente las organizaciones comunales

21 Gonzáles, Manuel Guillermo 1987 Origen y evolución de las formas asociativas campesinas de producción y de trabajo en Colombia (Santiago de Chile: CEPAL) *mimeo*. Contra los resultados de su propia investigación, el autor sigue fiel al discurso sobre la “incorporación de los marginados a la sociedad”, a través de tales “formas asociativas”. Véase también de Angulo, Alejandro 1991 “Un experimento en desarrollo participativo” en *CINEP*, febrero; donde se da cuenta de una empresa comunitaria agrícola que tuvo éxito sólo cuando dejó de ser comunitaria y se convirtió en una empresa privada común.

de antigua historia, con prolongado ejercicio de la capacidad de decidir autónomamente, y con la disciplina social para el cumplimiento de las decisiones, han demostrado ser, en el campo latinoamericano, no solamente capaces de perdurar, sino inclusive de formar empresas comunales exitosas. Uno de los casos mayor documentados es la empresa comunal de Taquile, para gestionar y controlar la actividad del turismo en beneficio de la comunidad.

Taquile es una pequeña comunidad isleña en el Lago Titicaca, en el lado peruano, de difícil acceso, distante de los centros urbanos de la zona. Sus habitantes forman una comunidad de larga historia. Han formado organismos exitosos para atraer, alojar y transportar turistas; grupos de producción artesanal para ese mercado; ferias y almacenes de venta de artesanía. La comunidad comienza a ser próspera, sus servicios lentamente comienzan a modernizarse y sus productos comienzan a ser adecuados a las tendencias de su mercado. Pero, también, esa prosperidad impulsa las tendencias a la actividad comercial privada entre los miembros de la comunidad. Un cambio fundamental está ingresando en ella²².

22 Healey, Kevin y Zorn, Elaine 1988 “Lake Titicaca’s campesino controlled tourism” en Annis y Hakim, *op.*

¿EXISTE HOY UNA “ECONOMÍA ALTERNATIVA”?

La documentación acerca de las “organizaciones económicas populares” en América Latina, no arroja un resultado definido acerca de esa cuestión.

Si lo que esa denominación señala es un relativamente numeroso, diverso y heterogéneo conjunto de modalidades de producir, consumir y reproducir bienes materiales y servicios, más o menos diferenciable de la organización empresarial predominante en el capitalismo contemporáneo, eso es, sin duda, cierto. En efecto, es demostrable que:

1. Existe un sector más o menos amplio, no suficientemente medido en la investigación, de unidades de actividad económica que no son plenamente de tipo empresarial, es decir, no están basadas exclusiva o predominantemente en el salario y en general en el mercado; ni se organizan siempre entre grupos sociales

desigualmente ubicados en ese intercambio, bajo el control y en beneficio de los que controlan los recursos de producción.

2. La participación de las relaciones familiares, en general de las relaciones primarias (compadrazgo, clientelismo, procedencia geográfica y/o “étnica” común), en las unidades organizativas de la actividad económica; y el hogar o vivienda y la calle como sedes de dicha actividad, son los rasgos comunes de aquellas modalidades.
3. La fuerza de trabajo se intercambia sólo parcialmente en el mercado, a través del salario; y el salario se combina con trabajo no pagado, en proporciones variables según las modalidades.
4. La organización del control y de la administración del trabajo y de los recursos en esas unidades, admite predominantemente las normas de la organización familiar y, eventualmente, comunal.

Desde ese específico ángulo de evaluación, en la economía urbana actual en América Latina, podría ser diferenciado un sector donde no actúan plenamente las normas y las instituciones predominantes de la empresa capitalista.

¿Confirma eso la hipótesis de una “economía alternativa”, en el sentido específico de

cit., pp. 45-58. El primer estudio antropológico de esa comunidad fue hecho a comienzos de los cincuenta, por: Matos, José y Avalos, Rosalía 1969 *La comunidad de Taquile* (Lima: s/d). La distancia entre una etapa y otra de la comunidad es realmente notable.

una economía alternativa al capital, y concretamente en América Latina? No del todo. Como toda la información muestra, la amplia mayoría de tales unidades y actores de aquel sector se organizan incluyendo, en mayor o menor medida, el trabajo asalariado; entre grupos desigualmente ubicados acerca del control de los recursos productivos y en consecuencia de la producción y/o de los beneficios; se orientan a la obtención de beneficios y a la acumulación, si les es posible y operan, de ese modo, con la lógica del capital, en todo o en parte. En muchos casos se trata, seguramente, de un capitalismo de los pobres. Pero donde, de todos modos, es la lógica del capital la que preside, no obstante todas las limitaciones específicas que encuentra en ese nivel, el comportamiento de tales unidades y actores.

En esa franja económica, muchos de los que controlan las unidades y sus relaciones con el resto de la economía, son simultáneamente trabajadores y empresarios si emplean ajena fuerza de trabajo asalariado. Pero también hay asalariados que no tienen acceso alguno al control de recursos productivos; y otros que en la misma condición ni siquiera reciben salario. Las distancias sociales inmediatas, concretas, entre esos estratos –sobre todo vistas desde la cima del poder global– pueden

no ser, y de hecho no lo son en muchos casos, muy grandes; pero son reales y potencialmente ampliables.

Se trata, sin embargo, de una franja económico-social donde la reciprocidad es un elemento presente de modo generalizado, aunque no necesariamente predominante. El rasgo central de esta franja es su ambigua ubicación entre las relaciones de reciprocidad-comunidad, de un lado, y, de otro lado, el capital. En su conjunto, sin embargo, hace parte de la estructura global de poder del capital.

Podría admitirse, según todo aquello, que existe algo como una “economía popular”²³, es decir, aquella que protagonizan los que no controlan los recursos principales de producción, ni los resortes del poder estatal, o los del mer-

23 Véase, por ejemplo, la propuesta de José Luis Coraggio concepto de “economía popular”: “conjunto de recursos, prácticas y relaciones económicas propias de los agentes económicos populares de una sociedad”. La categoría “popular” aquí como: “unidades elementales de producción, reproducción (familia, cooperativas, comunidades, etc.) que dependen fundamentalmente del ejercicio continuado de la capacidad de trabajo de sus miembros para resolver las condiciones materiales de su reproducción”. Ver: “Política económica, comunicación y economía popular” en *Debate*, marzo de 1989, pp. 57-94.

cado. Que se caracteriza por la variable combinación entre los patrones del capital y los de la reciprocidad, aunque probablemente con el predominio tendencial de los primeros. Esa es una especificidad, sin duda, pero difícilmente sería suficiente para admitir que se trata ya de una “economía alternativa” a la del capital.

Empero, eso no agota el vasto universo de las relaciones económicas entre los despojados del control del poder y de los recursos de producción.

RECIPROCIDAD Y COMUNIDADES: ¿NUEVAS RELACIONES?

La investigación registra también, como ha quedado establecido, que en la economía urbana actual de América Latina está presente un sector de unidades de actividad económica que no se organizan en torno de la lógica del capital, sino exclusivamente sobre la base de la reciprocidad y de la comunidad.

El concepto de reciprocidad que aquí se utiliza, se refiere a relaciones de producción / distribución que se establecen con dos rasgos específicos: a) como intercambio directo, esto es que no pasa por el mercado, de fuerza de trabajo (capacidad de trabajar) y de trabajo

realizado (bienes y servicios); b) entre sujetos socialmente iguales.

El concepto de comunidad, se refiere a un modo de organización y gestión colectiva donde todos los miembros individualmente se consideran socialmente iguales, intervienen directamente en las decisiones, a través de los debates y de un sistema de autoridades elegidas y controladas de modo inmediato y directo, esto es, donde la representación de autoridad no es indirecta. Se trata claramente, de una específica estructura de autoridad.

Cuando ambos elementos se asocian en la formación de una unidad económica, no lo hacen por separado del mercado sino en relación contradictoria con él. Obtienen sus recursos iniciales en el mercado y usan los que producen para el mercado de todo aquello que requieren y que no producen. Tienen, sin embargo un rasgo propio: esas unidades de actividad económica no se proponen la obtención de beneficios desigualmente distribuibles entre los miembros.

La información disponible no permite medir la proporción de esas unidades de reciprocidad y de comunidad dentro de la economía urbana latinoamericana. Probablemente es un sector relativamente reducido, si se lo compara con el anterior, cuasi o semi o para-empresarial.

La información tampoco permite ir muy lejos en la discriminación de la actividad de esas unidades dentro de la estructura productiva. Sin embargo, principalmente la documentación acerca de Chile y Perú, permite sugerir que se concentran abrumadoramente en el sector de la producción y distribución de alimentos: las “ollas comunes”, los “comedores populares”, los “comités del vaso de leche”, son sus ejemplos demostrativos. Secundariamente, parece ser también que la producción de productos alimenticios cobijaría una parte de esas unidades, si se piensa en los “huertos familiares” chilenos. En los “talleres” y “microempresas”, de ambos países, la reciprocidad existe en combinación con el salario. Pero la información no es suficientemente eficaz sobre eso.

Se trata, demostrablemente, de un sector relativamente reducido de unidades de actividad económica, y, sobre todo, no ubicado en ninguna de las áreas principales de la estructura productiva urbana.

Con todo, la presencia de un sector de unidades de actividad económica, exclusivamente fundadas en la reciprocidad y organizadas como comunidad, importa una novedad sociológica en el escenario latinoamericano. Y si se considera la presencia importante, generalizada si no predominante, de la reciprocidad en el

resto de la “economía popular”, se abren algunas cuestiones necesarias: ¿se trata solamente de un fenómeno coyuntural, de una “estrategia de sobrevivencia”, imputable a la crisis del capitalismo subdesarrollado y dependiente, y destinado a desaparecer con ella?

La reciprocidad como relación social básica y la comunidad como forma de organización y de gestión del trabajo y de los recursos, así como de marco de una existencia social global, fueron los elementos centrales de la vida social en el territorio que ocupa hoy América Latina, antes del período colonial. Y no han dejado de serlo hasta hoy para una parte importante de la población campesina de origen indígena. Pero habían venido retrocediendo frente a la expansión de las relaciones sociales impuestas por los colonizadores, la servidumbre y la esclavitud, primero, y después, sobre todo, el capital, hasta el punto de que parecían instituciones supérstites, en algunas zonas campesinas del mundo andino o de México-Mesoamérica.

La novedad de la reciprocidad y de la comunidad en América Latina, no es, pues, cronológica. Es sociológica. En primer término, porque en sus actuales modalidades aquellas relaciones sociales no son simplemente una extensión del patrón histórico original. En segundo término, porque ahora son más características del

mundo urbano del capitalismo. Son, por todo eso, un producto de las actuales condiciones en que opera el capital en estos países.

La reciprocidad y la comunidad eran antes los rasgos fundantes de colectividades cerradas, donde la jerarquía social y la tradición eran la fuente de las normas y de los valores cotidianos, y donde, por otra parte, el espacio de la identidad y de la libertad individuales, de la creatividad individualizable, no era, no podía ser, muy amplio. Pero en el mundo urbano actual de Santiago o de Lima, no es más la jerarquía social originaria, sino la igualdad social entre sus miembros, lo que caracteriza a las instituciones comunitarias. No es más la tradición, sino el debate y la decisión colectivos el ámbito de donde surgen las normas, las instituciones, los valores. Y por lo mismo, son la identidad y la creatividad de los individuos lo que alimenta la comunidad, sin que eso implique simplemente que ello se ejerza sobre un *vacuum* histórico, ni que la tradición sea inexistente. Excepto que la tradición es, cada vez más, la del cambio, no sólo, ni tanto, de la continuidad²⁴.

24 Una convincente documentación ha sido establecida y discutida en nuestra reciente investigación en Villa El Salvador (VES). Véase: *Villa El Salvador. Poder y comunidad* (Lima, CEIS-CECOSAM, 1996).

Eso es aún más notable, si se tiene en cuenta que en Chile y en una ciudad como Santiago, los patrones comunales y de reciprocidad no tenían, desde hace tiempo, la misma vigencia y la misma fuerza que en el Perú o en Lima. No es, según eso, solamente la vinculación inmediata con la historia andina, ni la mera expansión de presuntas o reales identidades “étnicas” de origen indígena en las ciudades –como sería el caso de Perú, Ecuador o Bolivia– lo que explicaría la nueva presencia de esas relaciones de reciprocidad y de comunidad. ¿Qué entonces?

La explicación no es, quizás, tan difícil. Pero aún es de todos modos indecisa. Bajo las condiciones del capital en sociedades como las de esos países, y otros en el “tercer mundo”, una proporción creciente de la población no puede vivir, ni siquiera sobrevivir, exclusivamente –o inclusive principalmente– sobre las base de las reglas del mercado capitalista. Tiene que apelar a otros modos, si existen, o inventarlos, si no.

Y no hay una opción única para eso. Las formas de explotación / dominación consideradas “arcaicas” parecen estar de regreso en muchos lados: trabajo coercitivo esclavista y para-esclavista; servidumbre personal, sin pago en salario; combinación del salario con esas formas; combinación de todas ellas o de cada una, con la reciprocidad y la comunidad; diferenciación

de éstas últimas separadamente, bajo determinadas condiciones²⁵.

Se trata, en consecuencia, de un producto de las tendencias de las relaciones entre el capital y todas las demás modalidades de relaciones sociales, o, en otros términos, con las otras formas de trabajo no-asalariado. Donde hay que ir a buscar los factores específicos que empujan a una parte de la población hacia la reciprocidad y la comunidad, no es tanto en la “tradicción andina” precolonial o colonial latinoamericana, sino en las tendencias de comportamiento actual del capital.

Este no es, desde luego, el lugar, ni la ocasión, para esa indagación. Con todo, es pertinente sugerir una pista de trabajo. La mercantilización de la fuerza de trabajo, la formación

del salario, se inició, como se sabe, en algún momento entre los siglos XII-XIII en algún lugar del Mediterráneo, en las penínsulas itálica o ibérica, quizás en ambas, verosímelmente en la Península Ibérica antes de la “reconquista” castellano-aragonesa. Ese proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo parecería estar empezando a agotarse, si se toma en cuenta que: a) en algunas unidades de producción del universo capitalista, la acción valorizante de la fuerza de trabajo individual no está presente o no de modo significativo y ha dejado, en consecuencia, de ser allí indispensable; b) que en los niveles más altos de la estructura global de acumulación es reconocida la tendencia de predominio del trabajo muerto o acumulado, sobre el trabajo vivo; c) que la compra y venta de fuerza de trabajo continúa aún expandiéndose en los más bajos niveles del universo capitalista, pero en condiciones de sobre-explotación.

Al mismo tiempo, una contradicción ha comenzado a protuberarse. De un lado, está aún activo el proceso de descomposición de las relaciones no capitalistas de producción / distribución y se produce una cantidad creciente de fuerza de trabajo disponible para ingresar en el mercado de fuerza de trabajo. Sin embargo, dadas las tendencias anteriores, una proporción creciente de esa fuerza de trabajo no podrá ser

25 En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la formación de una comisión de investigación sobre la esclavitud en el mundo actual. Sus conclusiones recientes indican que unas 200 millones de personas estarían actualmente en situación de esclavitud. Antes, la OIT, en su Informe de 1993, reconocía la existencia de unas 6 millones de personas esclavas. Y la expansión de esa forma de explotación-dominación estaría ocurriendo en regiones de la ex Unión Soviética, en China, y quizás en Estados Unidos. Véase la “Entrevista a José de Souza Martins” en *Estudios Avanzados* (San Pablo: USP) N° 31, 1997.

comprada, ni vendida; esto es, no podrá ser convertida en mercancía. De otro lado, en consecuencia, formas de trabajo no-salariales tienden a ser reproducidas, de otro modo que en el pasado, ahora bajo las condiciones del capital y en articulación con éste.

En las condiciones tendenciales del capital, y de la distribución geosocial de sus beneficios y de sus desventajas, la mano de obra disponible, sobre todo en el “tercer mundo”, está en una peculiar situación: no puede sobrevivir solamente según las normas del capital; ni puede todavía separarse y aislarse de ellas. Requiere aprender en una práctica no siempre ni necesariamente consciente, cómo servirse de ambas, en las proporciones que las situaciones y posibilidades concretas permitan o exijan.

Es dentro de esa tendencia que la parte más inmediata y directamente ligada a la sobrevivencia inmediata, la alimentación específicamente, en varios países se organiza o tiende a ser organizada entre los desposeídos de recursos de producción e impedidos de vender su fuerza de trabajo de manera casi exclusivamente fundada en la reciprocidad y en la comunidad, porque ellos no tendrían, si no, otro modo de sobrevivir. Para segmentos amplios de la población latinoamericana de hoy, en algunos momentos, la solidaridad y la reciprocidad

pueden ser el único posible recurso para la sobrevivencia.

La reciprocidad y la comunidad, productos de la historia actual del capital global, no son en esas poblaciones el resultado de comportamientos y decisiones ideológicas, ni de visiones intelectuales, ni de una previa y separada “ética de solidaridad”. No son un intento político-ideológico de “construir” sociedades utópicas²⁶. Y sus protagonistas pueden no solamente no ser conscientes de estas cuestiones, sino, inclusive, como ocurre ahora en las elecciones nacionales de varios de esos países, apoyar a y votar por las opciones políticas de “derecha”. No se trata, por lo tanto, de artefactos políti-

26 El más importante movimiento de ese carácter en este siglo fue el de los kibutz en la fundación de la nueva sociedad de Israel. El kibutz fue un intento de llevar a la práctica en Palestina la utopía de los socialistas del movimiento judío: construir una asociación de gentes libres, conscientes e iguales que organizan su existencia social en torno de la reciprocidad, de decisiones colectivas debatidas y consentidas, y de la autoridad comunal. Durante una primera etapa recorrió esa trayectoria. Pero después fue subordinado a los intereses sociales que dominaron el Estado de Israel. Véase de Schapiro, Melford E. 1956 *Kibbutz: Venture in Utopía* (Cambridge: Harvard University Press); de Schwartz, Richard D. 1957 “Democracy and Collectivism in the Kibbutz” en *Social Problems*, Vol. V, pp.137-147.

cos, sino de soluciones necesarias. De allí parte un conjunto de cuestiones cruciales para el debate contemporáneo, las relaciones entre capital y trabajo no-asalariado; las relaciones entre reciprocidad y mercado; las relaciones entre la racionalidad del capital y las de la comunidad, para mencionar algunas de las más inmediatas. Pero ellas no serán discutidas aquí.

Dicho todo eso, sin embargo, es igualmente necesario hacer notar que esas tendencias hacia la formación de una franja diferenciada de economía de reciprocidad y de comunidad, y la presencia de esos elementos en combinación con el capital, no tienen o no parecen tener aún la densidad y la definición que podrían permitirles una vitalidad perdurable, capacidad de reproducción y expansión, y de sostenerse en articulación y en conflicto con el capital²⁷.

Ciertos hechos tienen que ser observados en esa cuestión. Uno, la concentración prin-

cipal de esos elementos en las actividades de uso y de consumo inmediato, la alimentación, los servicios familiares, ante todo. Y sólo muy secundariamente, en actividades productivas de otra clase de bienes. Muy poco, demasiado poco, para fundar un modo de existencia social estable y diferenciada, una “economía alternativa” al capital.

Segundo, la extrema dependencia de las unidades de reciprocidad-comunidad, del apoyo financiero e institucional exterior. Virtualmente sin excepciones, todos los estudios registran esa dependencia. Si bien no todas las unidades se originan de ese modo, todas en cambio perduran solamente de ese modo, lo mismo en Chile que en el Perú o en Brasil. O, como en el caso colombiano y boliviano, inclusive las “cooperativas” y “comunidades” rurales. La Iglesia, la “solidaridad internacional”, las “organizaciones no gubernamentales (ONG)” locales, las organizaciones políticas y hasta organismos del Estado, conforman esa red de apoyo a esas comunidades. Y más aún, ese apoyo exterior es una de las típicas demandas de movilizaciones callejeras o institucionales de ese tipo de comunidades.

Tercero, la concentración, en algunos casos virtualmente exclusiva, de personas del género femenino en esas organizaciones; con

27 Otros autores, por ejemplo Gustavo Esteva, tienen otra opinión: “Quiénes viven en los márgenes parecen haber encontrado en la crisis una oportunidad excepcional para llevar adelante sus proyectos y para regenerar sus modos de vida” y agrega poco después “Ellos son el nuevo fantasma que recorre el mundo”. Véase su ensayo: “El proyecto político de los márgenes”. Documento del XVI Congreso Interamericano de Planificación. San Juan, Puerto Rico, 1988.

una presencia escasa y a veces nula de varones. Así, en Chile, las mujeres son el 65% de los miembros del conjunto del sector de las “organizaciones económicas populares”, lo que incluye las unidades que combinan salario, mercado y reciprocidad²⁸. Y en el caso peruano, los “comedores populares” agrupan a 100 mil personas, todas ellas mujeres²⁹. Eso parecería apuntar a que, en un sentido, esas instituciones inician un proceso de socialización de las actividades familiares privadas, y se mantiene aún, por eso, el conjunto de roles asignados a la mujer en las sociedades patriarcales, por ejemplo la preparación y servicio de alimentación.

No cuesta imaginar, por eso, que si una súbita inversión masiva de capital, de producción de empleo y salarios significativos; de provisión de bienes y de servicios, etc., ocurriera en esos países, probablemente no quedaría sino alguna huella aislada y pálida de esa experiencia de comunidad y de reciprocidad.

Lo que cuesta imaginar, por el contrario, es exactamente esa posibilidad de que en un futuro previsible llegue a estos países tal masi-

va inversión de capital, producción masiva de empleo, de salarios y bienes y servicios. Y esta es, sin duda, la decisiva cuestión abierta para el futuro de esas tendencias. Es en las tendencias de desenvolvimiento del capital, de las relaciones entre capital y trabajo en el proceso de reestructuración mundial del poder, donde se resolverá el destino posterior de las experiencias que, para algunos, probablemente parecen ser muy locales.

LA COMUNIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO LOCAL

Las formas comunales o comunitarias de organización y de gestión, en América Latina no se presentan solamente en la dimensión económica de la existencia social, ni solamente en vinculación con la reciprocidad. Inclusive, podría decirse que actualmente parecen tener su más amplio escenario en las instituciones políticas, en las formas de autogobierno local.

Esas instituciones de autogobierno local han sido uno de los más frecuentes asuntos de la extensa literatura que, durante la pasada década de los ochenta, se produjo en América Latina bajo el rubro de los “nuevos

28 Hardy (1989) *op. cit.*

29 Ortiz (1990) *op. cit.*

movimientos sociales”³⁰. No será necesario recontar aquí su historia. Lo que importa dejar señalado es su gradual expansión en virtualmente todas las ciudades latinoamericanas, en los barrios “populares” que se han formado después de la Segunda Guerra Mundial³¹. Y,

30 Una discusión extensa acerca de la cuestión de los “nuevos movimientos sociales” en América Latina, y una revisión de lo principal de su literatura, se encuentra en Quijano, Aníbal 1991 “Poder y crisis en América Latina” en *Páginas* (Lima) N° 109: 40-60, junio.

31 Los casos más estudiados son, probablemente, los de Lima, Río de Janeiro, México, Santiago. La literatura de investigación y de debate es extensa. Véase, sobre todo, de Pease, Henry y Ballón, Eduardo (eds.) 1982 *Movimiento popular, participación y democracia* (Lima: s/d); de Gómez, Rafael 1990 “Autogobierno local: la experiencia de Huaycan” en *Creación popular de la sociedad* (Lima) pp.29-37; de Kovarich, Lucio 1988 *Lutas sociais e cidade* (San Pablo: s/d); de Singer, Paulo “Neighborhood in San Pablo” en Safa, Helen (ed.) 1982 *Toward a political economy of urbanization in the Third World Country*, (Delhi: Oxford University Press); de Mainwaring, Scott 1989 “Grassroots, popular movements and the struggle for democracy” en Stephan, Alfred (ed.) *Democratizing Brazil* (Oxford University Press) pp. 168-204; y, del mismo autor: “Urban Popular Movements, Identity and Democratization in Brazil” en *Comparative Political Studies*, N° 20: 131-143, julio de 1987; de Lomnitz, Larissa 1974 “The Social and Economic Organizations of a Mexican Shantytown” en

paralelamente, su revitalización e innovación en las zonas rurales, especialmente en el área andino-amazónica.

En la ciudad, los casos más definidos de toda América Latina y por eso también más estudiados son los de Villa El Salvador, principalmente, y Huaycán, formado tiempo después, en Lima (véase la nota anterior). El punto de partida en cada uno de esos casos, sin duda, fue la percepción de un vecindario urbano no como una población de gentes dispersas, sino como una comunidad y, en consecuencia, la decisión de sus pobladores de organizarse desde la partida en términos comunales, al margen de las regulaciones legales vigentes sobre las municipalidades; esto es, como una organización de autogobierno.

La organización comunal de autogobierno local, a diferencia de las municipalidades, implica una estructura organizativa que vincula a toda la población en una red de instituciones comu-

Latin American Research Review (LARR) Vol. IV; de Stokes, Susan 1991 “Politics and Latin-American urban poor. Reflections from a Lima Shantytown” en *Latin American Research Review* (LARR) Vol. XXVI, N° 2; de Powell, Sandra 1969 “Political Participation in Barriadas: a Case Study” en *Comparative Political Studies*, Vol.2, N° 2: 195-215.

nales, en todos los ámbitos de la vida colectiva: unidades de producción, mercado, escuela, servicios de salud, de distribución de ámbitos de recreación, etc. Eso, a su vez, lleva a una planeación urbana que contenga tales nexos de articulación y de comunicación³². En una población como Villa El Salvador, se trata de una vasta red organizacional para aproximadamente 300 mil habitantes. Huaycán tiene cerca de la mitad. La población involucrada es socialmente heterogénea, inclusive diferenciada en clases sociales y/o en etnicidades. Y su existencia social está, en su mayor y fundamental parte, articulada al conjunto de la sociedad “nacional”, a las estructuras formales, estatales, de autoridad, al mundo del capital.

El autogobierno comunal es, en consecuencia, una estructura de autoridad vinculada, directa o indirectamente, en relaciones de complementariedad y de conflicto, con el Estado y sus instituciones de autoridad. Pero también

suficientemente diferenciada y diferenciable, capaz de cobijar dentro de su propio marco una población social y culturalmente heterogénea; relaciones de producción y formas de trabajo heterogéneas; y una compleja pluralidad de instituciones sociales. Y capaz también de producir formas de identidad y de lealtad.

No se sigue de allí que todas las actividades sean comunales. La vida privada, individual, familiar, empresarial, política, etc., etc., no es incompatible con el autogobierno comunal local, hasta tanto cada ámbito privado no vaya en contra del autogobierno local. Pero no se trata de relaciones armoniosas, sino de tensión y eventualmente de conflicto. Sobre todo, a partir del momento en que sobre esas organizaciones se superpone el régimen municipal oficial. Villa El Salvador es un claro ejemplo actual de ese conflicto, no obstante el hecho de que sus autoridades municipales provienen de la “izquierda”.

En el ámbito rural / urbano (esto es, no exclusivamente rural, ni exclusivamente urbano) dos son los casos seguramente más importantes:

- 1) El reciente movimiento de reorganización de las poblaciones de la cuenca del Amazonas (grupos lingüísticos o “etnias”), en entidades de autogobierno local de estructura comunal,

32 Véase sobre eso los resultados de nuestra investigación en Villa El Salvador: Coronado, Jaime en Villa El Salvador: poder y comunidad, *op. cit.* También, de Ballón, Eduardo 1990 “La planificación participativa y la organización comunitaria como vía de desarrollo. El caso de Villa El Salvador” en *Políticas y estrategias de planificación* (Río Piedras: SIAP). Sobre Huaycán, véase Ortiz (1990) *op. cit.*

que se articulan entre sí en cada país formando una red organizacional de segundo nivel y luego a escala amazónica, en una red de tercer nivel, denominada Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Se estima que la COICA representa algunos cientos de miles de personas.

Las organizaciones integrantes de la COICA tienen, además, organización nacional en cada país y están comenzando un período de conflictos crecientes con los Estados centrales que, en América Latina, no obstante la colonialidad inherente a las relaciones entre los grupos “étnicos” y culturas, se consideran “Estados-nación”. Los conflictos más fuertes se han producido en Ecuador, particularmente con la organización de los schuar, y han producido numerosas víctimas entre éstos. No son menores en los casos de Brasil, Perú y Bolivia, agravados por los problemas derivados de la producción de coca y el tráfico de cocaína en las regiones amazónicas de esos países. En Venezuela, el gobierno actual dio un paso notable: entregó al grupo de los yanomanis un territorio autónomo, más extenso que Bélgica. Ese es, aún, un caso singular.

2) La reciente organización de las comunidades aymaras, en el Altiplano peruano alrede-

dor del Lago Titicaca, en una estructura de autogobierno regional, formada por la asociación de las comunidades de cada circunscripción administrativa, en una estructura llamada “multicomunal”, y luego la articulación de tales “multicomunales” en la llamada Unión Nacional de las Comunidades Aymaras (UNCA). El propósito declarado es velar por los intereses de la población aymara en un momento en que la crisis es muy grave, hay muy poco o nada que esperar del Estado central y en consecuencia, se requiere una organización global, que permita debatir, decidir, planificar, globalmente.

En cada caso se trata de un proceso de revitalización de la institución comunal y de la reciprocidad; pero al mismo tiempo de una profunda innovación en la estructura de organización, de gestión y de autoridad. La organización implica asambleas y debates donde participan todas las personas mayores de 18 años (en algunos lugares, mayores de 14), cualquiera sea su condición y género. La elección de las autoridades, por votación en cada comunidad; la representación directa, bajo control directo en cada comunidad; la organización de instituciones ad hoc para cada ámbito de actividad (en la UNCA, por ejemplo, para la pesca, la agricultura, la ganadería, la artesanía, la educación, la

salud, los asuntos de la mujer, de los jóvenes), por los mismos mecanismos³³.

LA EXPERIENCIA DE VILLA EL SALVADOR³⁴

Una ilustración eficiente de las relaciones nuevas que van surgiendo en torno de la estructura comunal de autoridad, como forma de representación y de autogobierno local en las nuevas poblaciones urbanas formadas principalmente por trabajadores, así como, al mismo

tiempo, de sus dificultades frente a las fuerzas del capital y de su estado, es seguramente la experiencia de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES).

Villa El Salvador es ahora lo que en Lima suele ser llamado un “distrito popular”³⁵, donde habitan 254.641 personas, según el último censo nacional de población (1993). Pero nació como la CUAVES, en 1973, con una población censada entonces en 109.165 personas, agrupada desde una invasión de tierras en 1971³⁶.

La CUAVES fue producto de un compromiso entre el Estado y una población que buscaba tierra para poblar e invadió una zona arenosa en los linderos de una de las más exclusivas zonas “residenciales”³⁷ del sur de la ciudad. Este

33 La información sobre COICA proviene de recientes indagaciones personales con sus dirigentes nacionales y algunos regionales. Sobre la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), la información proviene de un reciente recorrido personal durante más de 2 meses en las comunidades aymaras agrupadas en UNCA, de extensas conversaciones con sus dirigentes nacionales y locales, y de asistencia a algunas de sus asambleas.

34 La información específica acerca de VES proviene de una revisión de los documentos de la CUAVES, de la bibliografía acerca de VES y de una encuesta hecha sobre una muestra del 10% de viviendas de VES, como parte del proyecto de investigaciones que llevan a cabo el Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) y el Centro de Investigaciones Sociales (CEIS). La muestra fue diseñada en 1996 por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) a pedido de CEIS-CECOSAM.

35 No sólo y no tanto por el nivel de ingresos y los estándares de vida, sino porque allí no habitan la burguesía y las capas medias que, *faute de mieux*, pueden ser llamadas “europeizadas”, tanto porque su cultura tiene ese sello, como porque procuran diferenciarse de las gentes de procedencia “andina” (término que se hace equivalente de “indio” o “cholo”) “ablancando”, i. e. “europeizando” su autoimagen e identidad.

36 Véase: “Villa El Salvador: Resultados del II Censo CUAVES 84” (Lima: VES, 1984) pp. 53 ss.

37 En Lima son denominadas así las zonas de vivienda de la burguesía y de las capas medias asociadas a ella en términos de ingresos y de estilos de vida. No recon-

compromiso fue posible por las características de lo que se autodenominaba el “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada” y fue mejor conocido como el régimen “velasquista”. Pero fue por decisión de los pobladores y contrariando las presiones estatales, que se organizó de esa manera, esto es, como una estructura comunal representación y de autogobierno local.

CUAVES se constituyó como un proyecto de autonomía política, pero no de separación de un sector de la población frente al Estado. En tal carácter fue, sin duda, una experiencia excepcional en el nuevo mundo urbano latinoamericano que se formó en la segunda mitad del siglo XX. No podía, en consecuencia, desarrollarse sino relaciones contradictorias con el Estado. Y es, en verdad, sorprendente el que haya podido, en esas condiciones, establecerse y perdurar por más de una década, hasta su virtual eclipse desde la segunda mitad de los años ochenta, primero sometido por el Estado, que lo convirtió en un Distrito y le creó un

taré aquí la historia de Villa El Salvador (VES), sobre la que hay una extensa literatura. Una revisión sistemática de ella fue tarea de nuestra investigación. Véase el respectivo informe de: Pajuelo, Ramón “Villa El Salvador en su Bibliografía” en *Villa El Salvador. Poder y Comunidad, op. cit.*

Concejo Municipal Distrital, para incorporar esa población, finalmente, a su propia y vertical estructura de autoridad. Y luego, cubierto por las tendencias de fragmentación social y de reclasificación de la población que las actuales tendencias del capital producen y que una versión extrema del “neoliberalismo” logró imponer abruptamente en el país, desde 1990.

Respecto de las cuestiones aquí debatidas, son muchas las implicaciones de esa excepcional experiencia que merecen ser consignadas. En primer término, debe ser señalada la gravitación de la CUAVES en la generación y cristalización de una identidad colectiva. Tiene que haber sido tan intensa que, aún hoy, cuando la autoridad comunal es, como institución real, y para los jóvenes incluso como memoria ya apenas una virtualidad, sus huellas son claramente perceptibles en la actitud de la población sobre sí misma dentro de la ciudad. No se trata de una identidad diferenciadora, de un nosotros frente a los demás. Se trata de una suerte de autoestima colectiva, que gravita sobre el promedio de los individuos, incluso en gentes para las cuales CUAVES no es más una esperanza, o no logró ser una memoria. Y para muchos aún es una apelación, cuando y cada vez que se requiere enfrentar una frustración o un descontento.

Esa poderosa huella de la experiencia de la CUAVES en la subjetividad social de la población, proviene probablemente de la experiencia colectiva de autorganización de la población, de planeamiento colectivo del poblamiento, de enfrentamiento colectivo a la autoridad estatal en demanda de recursos, de servicios urbanos y sociales, y frente a represiones policiales. Pero se formó y se sostiene en algo que no se ha desintegrado del mismo modo que la instancia central de la autoridad comunal: una textura social cuya formación, consistencia y reproducción remiten a la estructura de autogobierno comunal.

Dicha estructura partía de la organización de los habitantes de cada bloque de viviendas o “manzana”. Ellos se organizaban en una Asamblea y elegían a los miembros del Comité de Manzana y sus delegados o representantes. Los delegados de todas las “manzanas” formaban la Asamblea del Grupo Residencial y elegían un Comité del Grupo Residencial. Y finalmente todos los representantes de esos sectores se organizaban en la Asamblea Comunal que elegía a los miembros del Concejo Ejecutivo Comunal, al Concejo de Vigilancia, a los Concejos de Línea (seis en total: producción, servicios, comercialización, educación, salud y previsión social); a los Organismos de Apoyo (planifica-

ción, unidad económico-financiera, unidad de administración, comité de asesoramiento) y a los Comités Especiales. Cada teniente de un cargo, de cualquier nivel, provenía pues de la asamblea de una de las manzanas, su conducta y sus acciones en el cargo eran evaluadas allí y en el conjunto de la comunidad, y podía ser removido por acuerdo de su asamblea de origen. Esta fue, claramente, una democracia directa, donde los representantes, las autoridades y sus actos y decisiones en el ejercicio de esas responsabilidades, quedaban sujetos al control directo de los miembros de la comunidad.

Semejante estructura reclamaba y estimulaba la participación de todos los pobladores en los debates y en las acciones acordadas en las asambleas. Pero también permitía a las gentes establecer entre sí relaciones directas, desde las comunales, de grupos, hasta las plenamente individuales. En un sentido, de una parte se estableció una urdimbre entre la vida comunal y la familiar e individual. Pero eran gentes de heterogéneas procedencias e identidades, que se relacionaban entre sí como individualidades. Pudieron confluír, por lo tanto, múltiples y heterogéneas identidades y subjetividades. Articularse y diferenciarse intereses diversos. Consentir y disentir ideas y orientaciones. No era la memoria de los mayores o la tradición y

las jerarquías tradicionales lo que regía la vida de la comunidad, sino el debate, la decisión, la elección. La solidaridad no era, por lo mismo, una voluntariosa decisión, o un discurso, sino el tejido mismo de la vida diaria entre las gentes de la comunidad. Y algo extremadamente importante de ser tenido en cuenta para esta discusión: toda acción era no sólo producto de debates y decisiones colectivas, sino que era ella misma colectiva, tenía siempre y necesariamente el carácter de una movilización colectiva de una parte o del conjunto de la población, en cada caso.

Esas formas de organización, de debate, de decisiones y acciones colectivas y la seguridad personal y colectiva conquistada en esa forma de existencia social, no tienen hoy la misma presencia afirmada e institucionalizada en cada parte de la población, pero en muchas de ellas no se han extinguido. La organización y la actividad de Grupos y de Sectores se mantienen en algunos casos y en otros aún, una latencia³⁸.

Es solamente contra el trasfondo de esa experiencia que puede entenderse el modo según

el cual fueron manejados los problemas de los pobladores de VES, durante la vigencia de la CUAVES³⁹.

Para partir, debe quedar establecido que virtualmente todo lo fundamental que VES tiene hoy en materia de planeamiento del poblado, de organización del espacio, de distribución de las viviendas, de provisión de recursos, de redes viales y servicios urbanos, de servicios de salud, de educación, fueron hechos por la CUAVES o fueron resultado de largas y con frecuencia conflictivas negociaciones con el Estado central, con la presión de miles de pobladores movilizados en las calles adyacentes a la respectivas oficinas públicas. Es notable que todo eso pudiera ser logrado por una entidad que nunca fue legalmente reconocida, aunque en el contexto político de ese período pudiera ser un interlocutor de facto para el Estado. Desde que se creó la Municipalidad Distrital, esos recursos y servicios se han ampliado⁴⁰.

El planeamiento y habilitación del espacio y del terreno, donde la CUAVES fue estable-

38 Véanse los documentos y testimonios mencionados en Coronado "La Estructura de Autoridad y Representación en una Comunidad Urbana" en *Villa El Salvador. Poder y Comunidad*, *op. cit.*

39 Para una discusión completa y pormenorizada de las CUAVES, tales como resultan de la documentación obtenida en nuestra investigación, véase, *op. cit.*

40 VES no tiene aún servicios completos de agua potable, de desagüe, ni de asfaltado de sus calles.

cida, fueron hechos como resultado de una negociación entre el Concejo Comunal y el Estado, conjuntamente por técnicos amigos de los pobladores y los miembros de la nueva comunidad. La CUAVES, ya estructura comunal de autoridad, llegó al acuerdo de ir hacia la organización comunal de la economía y de la sociedad. Con esa perspectiva, presionaba por un planeamiento integral del espacio, sobre la base de que el Estado admitiera que se trataba del espacio de una comunidad y que estaría bajo el control de ésta. El planeamiento fue proyectado así, en efecto, aunque no se realizó sino en sus primeras etapas. La distribución de las aéreas y edificaciones públicas, así como la distribución de las áreas de viviendas, siguió ese planeamiento.

No es probable que haya muchos ejemplos de esta forma de poblamiento, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo urbano de América Latina. Y para todo observador de VES, no cabe duda de que esa forma comunal de planeamiento moderó, de modo notable, la hostilidad del seco y desértico arenal, asociado al de la pobreza, sobre sus pobladores. CUAVES decidió la forestación de su territorio y diseñó áreas de bosques futuros, irrigados con lagunas de oxidación, plantíos de árboles en las calles, jardines. Poco de eso pudo ser

cumplido en sus diez años de existencia. No se logró una instalación de servicios de agua y desagüe, que permitiera irrigar áreas vegetadas. Pero el desierto pudo no sólo ser habitado de gentes, sino también de dispersos árboles irrigados con el agua ahorrada en el consumo doméstico, lo que ha llevado a algunos economistas-ecologistas como Juan Martínez Allier, a señalar VES como el ejemplo de un planeamiento urbano con sentido ecológico.

CUAVES no logró en cambio que el Estado admitiera que ella fuera la dueña del territorio de la comunidad y que la población decidiera en asambleas dónde, a quiénes y por qué razones se adjudicarían las viviendas. Especialmente, que el precio de los terrenos para viviendas no fuera pagado o, en todo caso, no al Estado, sino a la propia CUAVES. Y en consecuencia, que la producción de las viviendas fuera una tarea y una responsabilidad comunal con sus miembros. La dirección inicial del Concejo Comunal fue derrotada en esa pugna y reemplazada por otra más pragmática en sus relaciones con el Estado. En adelante, la construcción de las viviendas, si bien hecha como autoconstrucción por cada familia, en muchos casos apoyada en la ayuda mutua procedente de la experiencia comunal de los indígenas peruanos, fue un asunto privado.

Entre 1974 y 1975, CUAVES negoció también con el Estado la creación de una estructura básica de financiamiento de las actividades de producción, incluida la vivienda, de sus pobladores. El 18 de agosto de 1974 fue establecida la primera Caja Comunal, con fondos iniciales del Banco Popular del Perú (expropiado y pasado a la propiedad estatal). El propósito de la Caja Comunal era establecer un sistema de ahorros y de créditos de los pobladores, para las necesidades individuales y colectivas. Para los gastos familiares en salud, educación, vivienda, ante todo. Y en segundo lugar, para la organización de “empresas autogestionarias” pensadas para producir, en adelante, de manera comunal sus bienes y servicios.

La Caja Comunal tuvo vida activa durante una primera etapa. Recibió ahorros y otorgó créditos. Con éstos se inició la formación de pequeños talleres artesanales y la organización de un servicio comunal de expendio de kerosene, que era entonces y aún es hoy, el recurso energético doméstico de las cocinas de la mayor parte de los pobres de Lima.

CUAVES formó una comisión de proyectos públicos, a la que encargó estudiar y proyectar la factibilidad de unas 20 empresas autogestionarias en VES. Los proyectos no prosperaron, entre otras cosas debido a que los conflictos

con el Estado entraron en una fase más aguda. Pero los planes no se licuaron. Fueron debatidos una y otra vez, entre 1974 y 1975. Los proyectos incluían una Granja Agrícola, Talleres de Panificación, de Carpintería, de Vidrio Soplado, la creación de una Empresa Comunal de Transporte, otra de Construcción Civil; la habilitación de una Zona Industrial. Entonces se inició la formación del Parque Industrial de VES, con pequeños talleres formados bajo el patrocinio de la comunidad.

Las Comisiones de Educación, de Salud, de Transporte, de Comunicaciones, desplegaron un incesante esfuerzo para conseguir que el Estado estableciera en VES centros educativos, de salud, servicios de transporte colectivo. A esas presiones se debe la presencia actual de varios centros educativos, de un hospital y de centros de salud. Y vale la pena registrar los enfoques que orientaban los esfuerzos. En la II Convención de la CUAVES, en agosto de 1974, fueron debatidos todos los proyectos de desarrollo, en cada una de las áreas. Sobre la educación se afirma que: “es un engranaje fundamental para la auténtica liberación de nuestra sociedad, del sistema de explotación y de dependencia” y sobre la salud, que “el concepto de salud es la expresión más visible de la capacidad de realizarse como ser humano y social” y que por eso

la política de salud de la comunidad debe ser “encarado en sus aspectos culturales, sanitario, económico y social”.

El manejo del servicio de distribución del kerosene, es quizás uno de los más ilustrativos ejemplos de lo que significaba la organización y la autoridad comunal en la vida diaria de la población de VES. CUAVES se había hecho cargo de esa responsabilidad desde 1973, y en 1975 se organiza una red de centros de distribución del producto. El propósito declarado era abaratar el costo de uno de los más indispensables elementos de la vida diaria de la población, eliminando el tramo de la intermediación privada. CUAVES logró que PETROPERU suscribiera un Contrato de Préstamo de Equipo (un surtidor, un tanque de 4 mil galones), a cambio de ser el único vendedor del producto en esa población. Y, durante unos años, esa fue una de las más valiosas ayudas diarias de la autoridad comunal a su población, aunque fue también una de sus más complicadas y trabajosas tareas.

Las relaciones con el Estado no podían ser sino contradictorias, y los conflictos en el Estado atravesaban a toda la población de VES. Tras el golpe de Estado de 1975 y el cambio del carácter del régimen militar, una de las tendencias políticas dentro de la comunidad gana las

elecciones al Concejo Comunal e intenta dismantelar todas las entidades de producción, de distribución y de financiamiento de la CUAVES. Duró un año. La amplia mayoría de la población levantó de nuevo el proyecto comunal. Eligió esta vez a una dirección para la cual era explícito un proyecto comunal de autogobierno y de autoproducción de la economía, de la sociedad, de la cultura.

Recomenzó entonces, con toda su fuerza, la movilización organizada de la comunidad exigiendo al Estado la dotación de servicios faltantes, de luz, de asfalto de transportes, de agua y desagüe, de limpieza pública, de centros de educación, de salud. Y se inició la reorganización de las empresas comunales, que la administración anterior había logrado dismantelar casi totalmente: la Caja Comunal, la Farmacia Comunal, la Ferretería Comunal, los Grifos de Kerosene, el Parque Industrial. Muchos de esos pedidos fueron atendidos, no por el Estado, pero sí por agencias internacionales, como UNICEF, UNESCO, en las áreas de educación y de salud. Por un tiempo, también las empresas comunales se reactivaron.

La economía peruana, sin embargo, ya había ingresado en la crisis mundial desde 1974. El Estado gobernado por un régimen menos ambivalente frente a las demandas populares, te-

nía menos disposición a ceder a las demandas y a las movilizaciones de VES.

La segunda mitad de la década fue ocupada por grandes confrontaciones sociales y políticas entre el gobierno militar y los trabajadores, sobre todo, pero también entre el gobierno y sectores de la burguesía. El régimen militar asume un carácter dictatorial más abierto frente a los trabajadores, logra contener y dispersar las fuerzas organizadas más radicales, derrotando el Paro Nacional de 1977, y sobre esa base reabre desde 1978 una nueva institucionalidad liberal, que se ha mantenido hasta el “fujimorismo”⁴¹.

CUAVES se constituyó en esos años, especialmente entre 1975 y 1978, en uno de los bastiones organizados de la resistencia popular contra la dictadura. Aún en esas circunstancias, manejando las contradicciones internas del régimen militar, CUAVES logra acuerdos con entidades estatales (Oficina Nacional de Apoyo Alimentario, Instituto Nacional Forestal), y con organismos de ayuda internacional

(CARE), para la conservación de sus áreas forestadas, y para dar empleo y salarios a pobladores de VES en esas actividades.

Entre 1980 y 1983 en la CUAVES crecen, como en la izquierda de todo el país, las tendencias políticas adversas a las ideas de autogobierno y de autoproducción de la sociedad. Casi todas ellas van también dejando atrás sus propias ideas favorables al “socialismo realmente existente” y van adoptando el discurso social-liberal, los más, y socialdemócrata los menos. El “barrantismo” (por Alfonso Barrantes) fue la ajustada expresión política de esas tendencias, juntas conquistan una amplia hegemonía en el Concejo Comunal de CUAVES, presionan por la conversión de VES en un distrito y la elección de un Concejo Municipal. El Estado decreta en 1983 la creación del Distrito de Villa El Salvador y, en las elecciones municipales de ese mismo año, las fuerzas hegemónicas en CUAVES obtienen también una amplia victoria.

Durante un período más bien corto, las relaciones entre el Concejo Municipal y el Concejo Comunal fueron ambivalentes. Inclusive, formalmente el primero admitió la primacía de la autoridad comunal. Eso no duró mucho. Los conflictos no tardaron. Se hicieron ásperos sobre todo en relación con los impuestos

41 Sobre mi debate acerca del “fujimorismo”, ver mis textos reunidos en: *El Fujimorismo en el Perú* (Lima: SEADE, 1995); y “Populismo y Fujimorismo” en AA. VV. *Populismo en los Andes* (Caracas: Nueva Sociedad, 1998).

municipales. La población tenía que pagar en adelante, tributos, a los que apropiadamente se conoce como impuestos, por los servicios que había arrancado con sus movilizaciones al Estado o había logrado establecer con su propio trabajo. Pero CUAVES estaba ya demasiado debilitada, dispersos los grupos que impulsaban la organización y la existencia comunal, y estaba bajo la hegemonía de los partidarios del Estado central. El Municipio se impuso en toda la banda.

CUAVES no ha dejado de existir formalmente. Pero desde mediados de los ochenta fue dejando de ser la excepcional red organizativa, la fuerza movilizadora y la intersubjetividad y la forma de existencia diaria, que eran su especificidad y su promesa. Hoy, inclusive su local está alquilado a una de las organizaciones religiosas llamadas protestantes.

Las empresas comunales (la Caja Comunal, la Farmacia Comunal, la Ferretería Comunal, la distribución comunal del kerosene, los talleres comunales) han sido desmanteladas. El Parque Industrial de VES ha sido convertido, por deliberado esfuerzo del Estado y del Municipio, en una colección de pequeñas empresas privadas.

En las ceremonias por el 25° Aniversario de Villa El Salvador, en 1996, sólo el Distrito fue

celebrado. No obstante las huellas de la experiencia comunal en la intersubjetividad de una parte de los pobladores, la estructura social de la población es muy distinta que durante la existencia de la CUAVES. No solamente no existe más la urdimbre organizativa comunal, como trama de las relaciones de la vida diaria de las gentes. La diferenciación y la estratificación social se han hecho notablemente pronunciadas. La concentración del control de recursos, de ingresos, sigue las mismas pautas que en el resto de la sociedad peruana. Es decir, ha crecido bruscamente el número de pobres y la magnitud de su pobreza. Notablemente, en una muestra del 10% de hogares de VES, en 1996, no se encontró ningún ingreso personal que llegara a mil soles mensuales (en el otro extremo, casi el 10% de la muestra no alcanzaba el Ingreso Mínimo Legal, 230 soles en la fecha de la muestra).

Pero esta vez, los pobres de VES no están organizados, la mayoría de ellos no tienen relaciones estables fuera de la familia inmediata, porque la lucha por la sobrevivencia es un asunto individual y familiar. De allí, probablemente, como luego veremos, la insistencia de los incluidos en esa muestra sobre el carácter individual del trabajo.

LAS IMPLICACIONES DE LA RECLASIFICACIÓN SOCIAL

Lo que ha ocurrido con la CUAVES no fue, sin embargo, sino en primera instancia, el resultado de los cambios en las correlaciones de fuerzas políticas e ideológicas entre la población. Mucho más poderosa ha sido la actuación de las tendencias del capital que se conocen hoy como “globalización” (la reconcentración mundial del control de recursos, de ingresos y del Estado), y cuya aplicación comenzó inseguramente en el Perú bajo la “segunda fase” del régimen militar, entre 1975-1980, prosiguió irregularmente bajo Belaunde, entre 1980 y 1985, y tras un corto y fallido intento de resistencia entre 1985 y 1987, ha sido finalmente impuesto en sus máximos extremos desde 1990, por el fujimorismo.

Dos de esas tendencias requieren aquí una discusión específica. Una, la fragmentación estructural del mundo del trabajo y la reclasificación social de la respectiva población. Otra es la crisis de identidades y de perspectivas sociales. Ambos procesos tienen lugar en toda la sociedad peruana, sin duda, pero no en toda ella actuó una experiencia como la CUAVES. Por eso tiene especial interés explorar más de cerca esos mismos fenómenos en VES.

1. LA FRAGMENTACIÓN ESTRUCTURAL

Los posmodernistas insisten en que la fragmentación estructural –o social, como ellos la llaman– es un fenómeno específico de la situación actual de la sociedad y que es uno de los signos de la posmodernización⁴². Es más probable, no obstante, que se trate de algo que ocurre en todos los momentos de transición entre un tipo de sociedad y otro, como ocurrió entre la sociedad feudal y la capitalista en Europa Occidental (“*all that is solid melts into air*”, observaron ya los autores del *Manifiesto*); o entre un modo y otro de un mismo, pero estructural e históricamente heterogéneo patrón de poder, como es nuestra experiencia en América desde 1492. De todos modos de lo que estamos tratando aquí no es tanto de la desintegración de las instituciones y organizaciones formales y públicas, sino de las más profundas y permanentes mallas de relaciones sociales que llegaron a existir de manera estructurada, es decir que se reprodujeron, se

42 En América Latina, sobre todo Lanz, Rigoberto 1996 *La deriva posmoderna del sujeto* (Caracas: s/d). También en: “Lo que el fin de la política quiere decir” en *RELEA. Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados* (Caracas: UCV) N° 1: 7-17, julio de 1996.

procesaron, por un tiempo largo, tanto en sus dimensiones material como intersubjetiva, incluyendo, en consecuencia, identidades, perspectivas y discursos.

Para no ir demasiado lejos, en esta ocasión, el proceso que algunos comienzan a denominar, inadecuadamente, como el “fin del trabajo”⁴³, es uno de los decisivos procesos de fragmentación estructural: las relaciones sociales de producción-distribución fundadas en el salario y los agrupamientos sociales correspondientes han entrado en ese proceso.

Para lo que aquí está en cuestión, es pertinente hacer notar que el proceso de clasificación fundado en esas relaciones sociales específicas ha entrado mundialmente en fragmentación. La “globalización” implica, desde este punto de vista, al mismo tiempo una re-concentración del poder y una fragmentación de amplias áreas de relaciones sociales. Para hacer visible el fenómeno, bastaría con observar las consecuencias de la “desindustrialización” masiva de países antes “industriales”, con el masivo desempleo y con la reproducción necesaria de formas de trabajo no-salariales. Los efectos son aún más drásticos en países como el Perú.

En el caso de VES, dichos efectos son notorios. En 1996, en una muestra del 10% de hogares del distrito, entre personas mayores de 18 años, cuya mayoría está entre 28 y 37 años de edad, sólo encontramos 5,75% de asalariados activos, ningún obrero industrial y un 20,31% de desempleados totales. Los demás trabajadores ocupados eran los llamados dependientes no-asalariados, 3,13%; artesanos y vendedores de calle 43,75%. Y trabajadores en relaciones eventuales de múltiples tipos, 7,81%.

Todos los trabajadores asalariados de esa muestra tienen empleos en lugares diferentes. Lo mismo ocurre con todos los demás encuestados. Esto es, están involucrados de modo estrictamente individual en sus ocupaciones. Y no se conocen entre sí. El máximo ingreso mensual encontrado en la muestra es menor de mil soles, equivalente a 377 dólares, y el más bajo es de 230 soles, unos 86 dólares (al cambio de la fecha de la encuesta).

El cambio es importante. Cuando la CUA-VES se organizó, 25 años atrás, era una población pobre, sin duda, cuyos recursos no alcanzaban para procurarse cada uno vivienda en el mercado, cuya mayoría no tenía empleo y salario estable. Pero con una minoría importante de asalariados estables, obreros en grandes y medianas industrias, o empleados del más

43 Rifkin, Jeremy 1994 *The End of the Work* (Nueva York: Jeremy P. Tarcher Inc.).

bajo escalón en dependencias del Estado. La estratificación no era muy pronunciada, ni la concentración de ingresos. La heterogeneidad social de la población no incluía diferencias de clase. Eran, en su generalidad, trabajadores de procedencias diversas, migrantes, en el mismo proceso de agrupamiento clasista que los demás trabajadores del país. El trabajo era parte de una malla de relaciones sociales.

No se dispone de cifras precisas sobre la composición laboral de la población fundadora de la CUAVES, en 1973. Las de los Censos Nacionales de esos años incluyen a VES dentro del Distrito de San Juan de Miraflores. Y el llamado Autocenso de 1973 (hecho por los pobladores de VES), no discrimina entre asalariados y no-asalariados (otras son sus categorías: artesanos y obreros, 37%; comerciantes, 33%; albañiles, 20%; servicios, 7%; agropecuario, 3%). La misma fuente señala que el 70% de los trabajadores se empleaba fuera de VES. Diez años después, en 1984, CUAVES hace otro Autocenso. Pero no se produce información directa sobre el trabajo. Las cifras son estimaciones hechas a partir del Censo Nacional de 1981 acerca del Distrito de Villa María del Triunfo al cual VES aún pertenecía. Como en 1973, una de cada cuatro personas tiene empleo estable. Sobre una PEA de 45.717 personas, los “adecuada-

mente empleados” (con salario mayor que el mínimo legal) son 37,8%; los “subempleados” (con salario menor al mínimo legal) son 45,8%; y los “desempleados” son el 16,4%⁴⁴.

Tales informaciones apuntarían a que una parte significativa, aunque minoritaria, de la población que se organiza originalmente en la Comunidad es asalariada, la mayoría de ella formada por obreros industriales. Los demás son trabajadores independientes que están, sobre todo, en el comercio callejero de bienes y de servicios de todo tipo. Los asalariados industriales trabajan en fábricas, se conocen entre sí, están organizados en sindicatos y muchos de ellos son dirigentes sindicales y miembros de organizaciones políticas, por lo general de izquierda.

De hecho, el primero de los Secretarios Generales del Concejo Comunal de la CUAVES, Apolinario Rojas Obispo, era obrero textil, dirigente del sindicato de la fábrica Hilos Cadena y de un Comité de Lucha Textil, y llegaría más tarde a ser uno de los dirigentes y uno de los redactores del Manifiesto del famoso Comando

44 Véase los datos del Autocenso de CUAVES en 1973, en: Zapata, Antonio 1996 *Sociedad y Poder Local* (Lima: DESCO) p. 101. Véase también: CUAVES 1984 *Un pueblo, una realidad* (Lima: VES).

Unitario de Lucha (CUL), que organizó y acaudilló el Paro Nacional de junio de 1977, en la práctica el primer paro nacional del país después de 1919, con el cual culmina el ciclo de movimientos populares desde 1945.

La población de trabajadores de Villa El Salvador es hoy, sin duda, más numerosa y más pobre que en 1973. Sin duda también está atada como antes a las relaciones de explotación del capital, sea de manera directa en la producción, o por medio del despojo en el mercado de ingresos y de bienes y servicios. Pero lo está de manera diferente que antes: de modo individual, disperso, sin condiciones sociales de agrupamiento en función de esas relaciones. En otros términos sus relaciones sociales dentro del capital son fragmentarias.

Las informaciones oficiales sobre la situación de los trabajadores del país, dan cuenta de que más del 85% de la PEA es subempleada, aunque el desempleo oficial aparece sólo alrededor del 10% de esa población. Una mirada más atenta a la información del último Censo, indica que la masa mayor de los trabajadores, incluidos los que tienen empleo, están en la misma situación: con relaciones fragmentarias dentro del capital.

La carencia de relaciones de trabajo estables, articuladas en agrupamientos amplios, para los

trabajadores, no implica solamente desempleo y subempleo permanentes o “desocupación estructural”. Los obliga a reproducir, de modo creciente, relaciones de trabajo no-salariales, a combinar flexible y pragmáticamente varias de ellas para poder sobrevivir. Están, en consecuencia, sometidos a un proceso de reclasificación social, o, en otros términos, a la salida de las previas relaciones de clases y a la reconfiguración de otras distintas, que no tienen aún, en ningún lugar del mundo, estructuras claras, cristalizadas y reconocibles por sus implicados.

2. LOS PROBLEMAS DE IDENTIDAD Y DE PERSPECTIVAS SOCIALES

Las actas y los documentos de las Convenciones de la CUAVES, en particular de la II y de la III⁴⁵, muestran el despliegue de una perspec-

45 “Los pobladores de Villa El Salvador rechazamos y repudiamos toda organización social, económica, política y cultural basada en el sistema capitalista e incorporamos a nuestra conducta social, a nuestra organización vecinal y a nuestras creaciones económicas, políticas y culturales, los principios socialistas de solidaridad y fraternidad entre los pobladores”, dice en parte la *Declaración Política de la I Convención de la CUAVES*, de 28 al 29 de julio de 1973. Véanse los documentos y los debates en los Archivos Apolinario Rojas

tiva social en la cual los conflictos entre el capital y el trabajo, de un parte, y las cuestiones de la liberación social de los trabajadores peruanos, de la explotación y de la discriminación, son los ejes centrales. Y no se trata solamente de un debate abstracto. La perspectiva orienta, modula, todos los proyectos y las propuestas concretas sobre la organización de la educación, de la salud, de la producción, de la distribución, de la comunicación, de la población organizada en la CUAVES.

La Comisión de Asuntos Políticos de la II Convención sostiene que el capitalismo privado, lo mismo que el capitalismo de Estado, son por igual formas de explotación del trabajo. La Comisión de Educación insiste en la necesidad del desarrollo de las facultades individuales y la conciencia social. La Comisión de Salud, propone que la salud es una expresión de las relaciones sociales y no solamente de la biología. Los documentos de la III Convención son todavía más explícitos y enfáticos. La democratización de las relaciones sociales cotidianas y del control de recursos y de los mecanismos de decisión colectiva, no la estatización del control de los recursos y de la vida de las gentes,

es proclamada como la trayectoria específica de socialismo que la CUAVES asume. El “cua-vismo” es el nombre de esa particular concepción de socialismo. Mientras esa trayectoria se desarrolla, CUAVES reafirma la decisión de mantener con el Estado central relaciones de autonomía y de negociación sobre los recursos que necesita del Estado.

La idea de trabajo en esos debates está asociada explícitamente a las cuestiones de explotación y de liberación de la explotación, al mismo tiempo, porque la experiencia de trabajo está articulada en estructuras sociales perceptibles, que colectivizan la experiencia, generan relaciones, identidades y perspectivas de grupo, permiten diferenciar, organizar y movilizar intereses sociales. Y no fueron pocos los que tomaron parte en esas Convenciones. A la III asistieron cerca de 1.200 delegados elegidos en todos los grupos y sectores de la comunidad y varios cientos más en calidad de participantes con voz, pero sin derecho a voto, ya que no eran delegados elegidos en sus respectivas asambleas de grupo y de sector. Las deliberaciones y las votaciones fueron seguidas, en consecuencia, por el conjunto de la población. La perspectiva y el discurso sobre las relaciones entre el trabajo y la explotación no eran patrimonio de una minoría, sino la corriente central del pensa-

y L. Rubio, V. Nicho. Véase también el estudio de Jaime Coronado, *op. cit.*

miento social de los pobladores de VES en ese momento. De otro modo, no sería explicable que con ocasión del Paro Nacional de 1977 y del Paro del magisterio en 1978, fuera el conjunto de la población la que tomara parte activa, en su promoción, en su defensa y en el cumplimiento de los acuerdos de sus asambleas.

Por esas razones, la perspectiva encontrada en la población encuestada aparece como un violento contraste. Todos ellos son trabajadores y sus ingresos no superan en ningún caso la parca cifra de 374 dólares. No obstante, virtualmente para todos, la idea de trabajo evoca, exclusivamente, las ideas de esfuerzo, de empeño y de sacrificio, individuales o, a lo sumo, familiares. En ningún caso, la idea de trabajo evoca relaciones sociales estructuradas, mucho menos la explotación o la dominación.

Cuando, por lo tanto, se encuentra que la mayoría abrumadora se identifican como trabajadores, se encuentra también que no se trata de una indicación de un lugar en determinadas relaciones sociales, mención de agentes antagonistas o de intereses socialmente diferentes, sino que se trata de una alusión a ser gentes esforzadas, activas, con capacidad de hacer lo necesario para sostenerse y, con más esfuerzo y algo de buena suerte, mejorar su situación en la sociedad.

Era muy sorprendente, antes de hacer esas verificaciones, encontrar que cerca del 2% de la muestra asumía la identidad de empresarios. Pero la idea de empresa resultó ser no diferente de la idea de trabajo. Un empresario no es, en esa imagen, el funcionario del capital, que ejerce el control de la relación social, del trabajo y de la apropiación final del producto. Se trata de una persona emprendedora, con iniciativa y con capacidad de trabajo organizado y persistente.

El trabajo y la empresa son, en consecuencia, elementos de una ética social que hace del esfuerzo y de la iniciativa los ejes del destino de los individuos, de los grupos sociales, de la sociedad. Y eso está en clara vinculación con las parejas de imágenes que forman, de un lado trabajo-esfuerzo e individuo-familia, del otro. Y eso aparece más acusado aún, cuando en el último escalón descendente de la estratificación social se coloca a los “vagos” y a los “desocupados”.

Finalmente, es pertinente aquí discutir brevemente algunas de las implicaciones de los datos sobre la percepción social de los encuestados acerca del conjunto de la sociedad, sobre todo respecto de las diferencias de las gentes en el poder y también respecto de sus expectativas sobre futuro.

En el discurso social característico de los pobladores de la CUAVES, la idea de la división de la sociedad en clases sociales y de esa división como el eje de la estructura del poder, parece ser la corriente virtualmente consensual, por lo menos entre los grupos dirigentes. Pero si se tiene en cuenta que los asistentes en las asambleas y convenciones eran cientos y en las movilizaciones colectivas varios miles, y que parecían participar de la misma perspectiva social, no es arbitrario inferir que ese discurso no era patrimonio solamente de una reducida minoría de dirigentes, o de una “vanguardia” iluminada. Los archivos que fueron organizados en este estudio, produjeron una respetable masa documental acerca de eso⁴⁶.

Lo que la encuesta mostró, sin embargo, no pareciera ser la continuidad de esa perspectiva social. Las gentes de la muestra, todas ellas, no tienen dificultad alguna en distinguir las diferencias de poder entre las gentes de la sociedad. La admisión de que la sociedad está hecha de gentes desigualmente ubicadas en el poder no tiene una sola excepción entre los encuestados.

De otro lado, la abrumadora mayoría señala el control de riquezas y el ejercicio de la autoridad política pública, como las fuentes y las expresiones de esa desigualdad. Pero se trata de la imagen de una sociedad estratificada según el acceso al control de riquezas y de poder político. Según eso, hay gente muy rica y/o con poder político, gente que tiene esos recursos en medida mediana, gente que tiene muy poca riqueza y nada de poder político y todavía algunas gentes que no tienen nada.

No sería pertinente inferir de esa diferenciación entre las gentes, la idea de que hay algo diferente que una estratificación social. Esto es, que en la estructura de la sociedad hay una ruptura entre intereses sociales y no solamente diferencias de medida en un *continuum* al que pertenecen todas las gentes. Sólo el 6% de la muestra señala, por ejemplo, que hay una cuestión de explotación en las relaciones de trabajo y que eso es lo que hace que unos se enriquezcan y lleguen a un lugar en el control del poder. La mayoría (41,18%), propone el “trabajo” (i. e. el esfuerzo, la iniciativa) como el factor de enriquecimiento de la gente y de su participación en el control del poder. Y, por supuesto, en el Perú, la “corrupción” pública y privada (45%) y el “narcotráfico” (15,63%).

46 Sobre todo, véanse los Archivos: Apolinario Rojas y L. Rubio, V. Nicho. Véase también el estudio de Jaime Coronado *op.cit.*

Eso no impide, sin embargo, que un 59,38% opine que la desigualdad social no es “natural”, mientras que el 26,56% opina que sí. Ni que virtualmente todos (90,2%) opinen que no debería existir desigualdad social entre las gentes. Y todos, menos dos personas, se identifiquen como trabajadores. Y notablemente, el 42,19% de la muestra se ubica en la “clase inferior”, la “clase C” de las encuestas de opinión pública, contra un 46,88% en la “intermedia” o “clase B” de esas encuestas, y un 3,13% en la “clase alta” o “clase A” de las mismas.

La muestra fue pequeña, de hogares, no de población, y el estudio fue concebido como una manera de levantar, aprender, las cuestiones significativas que pueden ser registradas en la sociedad peruana hoy y en particular entre los trabajadores. No hay, en consecuencia, nada concluyente en esas primeras inferencias, sobre ninguna de las cuestiones planteadas. Sin embargo, no hay modo de evitar la impresión de que el desempleo, la desagregación de los agrupamientos sociales ligados a las relaciones de trabajo, junto con la re-estratificación de la población de VES, presionan hacia una re-clasificación de esa población en sus relaciones con el poder capitalista. Y que todo eso se asocia a la declinación de la organización comunitaria, de las unidades

de actividad económica generadas dentro de ese marco, y presiona sobre las perspectivas de una parte de la población acerca de la sociedad, del poder, del futuro.

Ese trasfondo, dramatiza el significado de la desintegración de la organización y de la autoridad comunal y de la perspectiva de autogobierno y de autoproducción de la sociedad. No sólo han debilitado la capacidad de defensa de la mayoría de la población de VES frente a las exacerbadas tendencias “marginilizantes” del capital de hoy día, inclusive su capacidad de sobrevivencia como parte de una sociedad organizada. Y en la misma medida, parece haber agudizado también la crisis de identidad social y de las perspectivas sociales de los trabajadores.

La re-clasificación social, sin embargo, implica, implicará de todos modos entre los trabajadores, procesos de re-identificación social, el redescubrimiento de las relaciones sociales que se traman en torno del trabajo, la percepción de intereses sociales diferenciados en esas relaciones, la organización institucional de tales intereses. Esos procesos están ya activos en el mundo global del capital.

LA INSTITUCIONALIDAD COMUNAL: ¿LA DEMOCRACIA SOCIAL COMO CONDICIÓN DE LA CIUDADANÍA?

Tanto en los casos de Villa El Salvador, como en Huaycán, en sus orígenes debe considerarse la influencia relativamente importante de la orientación ideológica de los dirigentes de los pobladores cuando se constituían esas poblaciones. Pero, la amplitud y la densidad de las poblaciones respectivas (varios cientos de miles), indican también que esa influencia fue sólo uno de los factores. Podría quizás pensarse, con alguna justificación, que la experiencia de la comunidad andina, mostrada en la revitalización comunal entre los campesinos aymaras y amazónicos, actúa también en las ciudades de esos países. Pero el hecho de que estén presentes también en Santiago de Chile (las “juntas vecinales”, las “comunidades industriales”) o en Río de Janeiro (las Asociaciones de Favelados y su Federación de Asociaciones de Favelados del Estado de Guanabara), formas que embrionan organización y autogobierno local, cierto es que en menor escala, implica también que esa continuidad de la experiencia histórica es, de nuevo, sólo uno de los factores.

De algún modo, en las condiciones de la crisis económica, la propia institucionalidad de

la sociedad latinoamericana (y seguramente la de todo el “Tercer Mundo”) ha entrado en un periodo de reestructuración. Una parte de ella ocurre por el cambio de las relaciones entre los dominantes y los dominados, y en la disputa sobre el Estado, todo lo cual se establece ante todo como una crisis de representatividad política. La otra parte ocurre por la reorganización de los modos de existencia social de los dominados, primero para enfrentar en lo inmediato los problemas de la sobrevivencia o reproducción de la existencia social material; luego para enfrentar el largo plazo de sus problemas globales de organización social y política, y para reconstituir, redefiniéndola, su identidad en crisis. Está, según parece, en curso de constitución una nueva institucionalidad de la sociedad latinoamericana. Una parte del debate sobre la explicación apela a la “rebelión étnica” contra la continuidad de la colonialidad del poder en estos países. Pero, probablemente, en la conjunción entre la reproducción de la reciprocidad-comunidad en la producción y reproducción material de la existencia y social, y la expansión de la comunidad en la organización global de la existencia social, hay signos más complejos.

No parece arbitrario, en esas condiciones, señalar una cuestión necesaria, que reclama

una investigación posterior: de una parte, con sólo las reglas del mercado capitalista, las poblaciones pobres de América Latina no podrían en modo alguno reproducir su existencia material, no podrían sobrevivir; por eso requieren y organizan la reciprocidad, en medida creciente. De otra parte, con solamente los núcleos de Estado-nación⁴⁷ que se han formado en las condiciones de la colonialidad del poder, tampoco parece suficiente como marco y modo de organización de la existencia social global, para una parte creciente de las poblaciones “populares”, urbanas y rurales, de América Latina. Requieren la comunidad como forma de autogobierno local y regional.

¿Hay una relación necesaria entre esas dimensiones de la actual realidad latinoamericana? Aún es temprano para pensar en respuestas definidas. No son pocos, sin embargo, los signos que parecieran indicar que la globalización

del poder fundado en el capital consiste, entre otras cosas, en una drástica redefinición de las relaciones capital-trabajo y en una no menos drástica re-clasificación social de la población mundial. Ambos fenómenos parecerían llevar, de un lado, hacia la reproducción de formas no-salariales de explotación y de trabajo en general. De otro lado, hacia la crisis de las instituciones de autoridad del “Estado-nación” y, de ese modo, a la producción y o reproducción de otras formas y estructuras de autoridad.

Esas son, sin embargo, cuestiones abiertas que demandan investigaciones específicas, que aún tardarán. Para América Latina, son, no obstante, ya decisivas en el corto plazo. Por dos condicionantes:

1. En América Latina no llegó a ser plenamente universal el trabajo asalariado. Esto es, no fueron erradicadas del todo las formas previas o meramente distintas. Debido a eso, la des-mercantilización de la fuerza de trabajo, a nivel global, aquí parece implicar, ante todo, la más rápida extensión de las formas no salariales del trabajo, incluida la reciprocidad. Así se constituye una nueva clasificación social de la población, y una nueva heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad.

47 Sobre las limitaciones y dificultades del Estado-nación, donde la colonialidad no pudo ser sobrepasada, inclusive en la más larga guerra revolucionaria, véase el excelente estudio de: Eckstein, Susan 1977 *The Poverty of Revolution. The State and the Urban Poor in Mexico* (Princeton: Princeton University Press). También, de la misma autora: *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements* (Berkeley: University of California Press, 1989).

2. Del mismo modo, la colonialidad del poder, que consiste en que la diferencia entre lo europeo y lo no europeo funda la desigualdad de ambos en el poder, en la sociedad y en el Estado, no fue erradicada en América Latina. En otros términos, la sociedad no fue descolonizada, democratizada o “nacionalizada” plenamente, y en algunos casos quizás ni siquiera básicamente; ni representada tampoco, plenamente, en un “Estado-nación”. La mistificación eurocéntrica de esta categoría fue aún más acusada en estos países. Por ello nunca han dejado de haber, virtualmente en todos los países latinoamericanos, estructuras de autoridad diferentes de las estatales, en relaciones de complementariedad y/o de conflicto.

Nada hay que sorprenda, en consecuencia, que al ingresar el “Estado-nación” en un período de crisis, la nueva heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad latinoamericana tienda a producir, en todos los ámbitos posibles, otras estructuras de autoridad. Algunas de éstas encuentran sus patrones formales en la memoria, y aún, en las prácticas aún vigentes, como en las poblaciones de origen indígena, aunque no son, no pueden ser, simplemente una prolongación del pasado o de sus modelos. Otras, en-

cuentran sus modelos en las instituciones producidas por el capital en estos países, como los sindicatos, las asociaciones gremiales y corporativas. Las nuevas estructuras de autoridad que comienzan a brotar o a embrionarse, tenderán, probablemente, a combinar todos esos elementos y a producir mutaciones y productos muy diferentes. La comunidad actual, urbana o urbano-rural, es uno de esos productos.

¿QUÉ HACER FRENTE A LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA?

Lisa Peattie⁴⁸ realizó un prolijo estudio antropológico entre las pequeñas unidades de producción de calzado en Colombia, procurando encontrar respuesta a esa pregunta generalizada en el actual debate internacional: ¿qué hacer con el “sector informal”? Por supuesto, encontró que inclusive un segmento muy deli-

48 Peattie, Lisa R. 1982 “What is to be done with the informal sector? A case study of shoe manufacturers in Colombia” en Safa, Helen (ed.) *Towards a Political Economy of Urbanization in Third World Countries* (New Delhi: Oxford University Press) pp. 208-232, *op. cit.*

mitado es suficientemente heterogéneo como para mostrar que ni siquiera allí era posible una sola respuesta. La complejidad del problema es más notoria, si se piensa no solamente en términos de la economía, sino de la entera nueva institucionalidad social que va emergiendo en América Latina. Pero la profesora Peattie señaló también lo que no siempre es explícito para todos: *“economic policies are at the bottom grounded in political choice”*. Y eso añade complejidad al problema, porque los intereses entre los que hay que escoger no van todos en la misma dirección.

Este trabajo permite señalar que hay tres segmentos de la población latinoamericana de hoy que requieren más ayuda que los demás:

1. Los que son prisioneros del “polo marginal” del capital.
2. Los que se han constituido en las “organizaciones económicas populares”, incluidas las unidades exclusivamente fundadas en la reciprocidad y la comunidad.
3. Las organizaciones comunales de autogobierno local.

Los primeros están presos en un incesante y no siempre exitoso esfuerzo de pura supervivencia. Los otros dos, parecen haber salido

algo de ese nivel extremo y están, además, diversificando la institucionalidad económica, social, cultural y política en una dirección que lleva a la democratización de la vida cotidiana de la sociedad.

La propuesta más afín con la corriente ideológica predominante insiste en considerar a todos los sujetos, de lo que aquí se denomina “polo marginal”, como empresarios. Si así se decide, sería necesario ayudarlos a desarrollarse en esa dirección. Requerirán crédito, asistencia técnica para la gestión, la administración, el mercadeo, y mercado. De hecho esa política ha sido practicada en alguna medida en cada país. En el Perú, bajo el gobierno de Alan García, se creó el Instituto de Economía del Sector Informal (IDESI), para esas finalidades. Obviamente, los recursos disponibles eran tan magros que no produjo resultados eficaces. La Cooperación Técnica alemana tiene una red de servicios en esa dirección, en diversos países. Pero, naturalmente, sólo puede operar sobre una proporción realmente insignificante de esa población. Y algunas ONG han logrado establecer con los bancos redes de crédito a trabajadores urbano-rurales, procurando convertirlos en pequeños empresarios. El problema de fondo consiste, sin duda, en que hay una mistificación evidente de la realidad, si se considera a todos

ellos empresarios, reales o potenciales. Y ocurrirá, de todos modos, que aunque unos pocos de ellos lograran convertirse o ser convertidos en empresarios, por ese camino la generalidad de ellos nunca dejará su desesperada situación actual. ¿Es para eso, quizás, que ese discurso ideológico está diseñado?

La alternativa más promisoría, en consecuencia, sería ayudarlos a seguir el mismo camino que las “organizaciones económicas populares”, cuyos sujetos no han logrado salir de la pobreza, pero sí de la extrema situación de la pura sobrevivencia, solamente en la medida en que se han asociado, se han enseñado a combinar la reciprocidad con el mercado; pero, sobre todo, a no dejar que ninguno de sus miembros se las arregle como pueda y... no pueda.

Esta segunda franja de población, como vimos, se ordena en una ambigua situación entre el capital y la reciprocidad. Dadas las tendencias actuales de las relaciones capital-trabajo, y la concentración de recursos de todo el mundo bajo el control de unos pocos centros de acumulación, ayudar a las “oep” a convertirse en empresas capitalistas exitosas, es seguramente un callejón sin salida. Pero dada también la incipiente de los recursos y de la capacidad de reproducción de las unidades exclusivamente de reciprocidad-comunidad, este también se-

ría un camino inconducente. En consecuencia, hay que organizar la ayuda de tal modo que se encuentren medios eficaces para esa combinación, de modo flexible, para resolver problemas concretos, de producción, de distribución, de innovación tecnológica, de fortalecimiento de las organizaciones mismas, a través de su asociación en amplias redes zonales, regionales, nacionales y transnacionales.

Esas organizaciones requieren crédito, entrenamiento técnico, mercado, profundización de la democracia interna y de su capacidad de presencia pública. El crédito no provendrá del sistema financiero convencional, ni puede esperarse que continúe la dependencia absoluta respecto de la red de “solidaridad internacional”. Y cada “oep”, aislada o asociada sólo en un vecindario, no podría resolver todos esos problemas. En ese sentido, las experiencias de los pueblos urbanos como Villa El Salvador o Huaycán, o de los pueblos urbano-rurales como los aymaras de Puno, Perú, que intentan organizaciones globales, son caminos que requieren ser mejor estudiados y desarrollados. La experiencia de las aldeas africanas⁴⁹, donde

49 Ghai, Dharam 1990 “Participatory Development: some Perspectives from Grassroot Experiences”. Documento de la *Conferencia Internacional sobre la Par-*

existen redes de crédito, asistencia recíproca, generalización de innovaciones y mercado, podrían tener en América Latina una densidad y una eficacia, probablemente, mucho mayores.

Es en ese nivel, sin duda, en donde encuentran toda su importancia histórica las organizaciones comunales de autogobierno local o regional. Aquí no están, por razones obvias, el lugar, ni la ocasión, para ir más lejos o más a fondo en la discusión de la cuestión de las estructuras de autoridad en la escena latinoamericana actual. Dicha cuestión es, por supuesto, una de las más importantes, decisiva quizás, para el debate sobre la re-estructuración del poder, en particular de las instituciones políticas y de las relaciones entre lo político y lo social, o más restrictamente, entre Estado y sociedad. Pero su discusión requiere otro espacio.

Lo que importa despejar aquí es, ante todo, la confusión existente en mucha de la literatura actual, entre la reciprocidad como relación social de producción / distribución y la comunidad. De hecho, virtualmente la totalidad de los textos que tratan estos asuntos, incluyen esa confusión, sobre todo los estudios de la “oep”.

Es, acaso, probable que en las sociedades no mercantiles, en particular en el área andina, la comunidad y la reciprocidad tuvieran en algunos casos una relación que las hacía virtualmente equivalentes, porque la única relación social dentro de una dada comunidad fuera la reciprocidad. Esa no es, para nada, el caso de la comunidad en América Latina desde el siglo XVI. Desde entonces, y cada vez más, en una comunidad existen numerosas y diversas relaciones sociales, reciprocidad, pequeña producción independiente, pequeño o mediano capital, mercado.

Es necesario, por lo tanto, distinguir la comunidad y las relaciones sociales de producción y de intercambio. La primera existe, en todo lo fundamental, como una estructura de autoridad que enmarca e involucra una pluralidad de relaciones sociales, de instituciones sociales, culturales e inclusive políticas.

Lo que las hace importantes, en verdad decisivas, para nuestro debate aquí, es su demostrada capacidad de fortalecer la capacidad de las organizaciones económicas que combinan variablemente, pero de algún modo en torno de la reciprocidad, diversas formas de trabajo, de producción y de intercambio, para sostenerse y ampliarse, para insertarse en la economía dominante con posibilidad de

ticipación Popular en la Recuperación y Desarrollo de África, realizada en Arusha, Zimbabwe.

defender una cuota importante de sus recursos y de sus beneficios.

En su experiencia actual, la comunidad es un fenómeno nuevo, sobre todo en la sociedad urbana, pero no menos en la economía rural fundada en el capital. No se trata de una mera prolongación de la comunidad antigua, ni de las instituciones rurales en la ciudad. Especialmente cuando se trata de comunidades, o de articulaciones de comunidades, que agrupan, como en los casos de Villa El Salvador o de la UNCA, a cientos de miles de personas.

Más allá de la retórica de la “participación popular” y de las propuestas de autocontemplación admirativa que le proponen las capas medias profesionales, como lo denuncia Sheldon Annis⁵⁰, son sin duda una realidad que no

proviene de las ideologías políticas convencionales, sino de las presiones estructural-históricas de la realidad actual.

Si se logra establecer mecanismos eficaces, como existen ya en algunos casos, para articular las “oep” a esas comunidades de autogobierno local o regional, su capacidad de presencia y de presión por recursos, espacio, autoridad, en la sociedad podrá ser robustecida. En todo caso, las amplias masas prisioneras del “polo marginal” de la economía podrán encontrar espacio para otro desarrollo, no sólo para la sobrevivencia. Sin ello, aquellas “oep” quizás no se irán, ya no se morirán; pero pueden tardar mucho en ser eficaces alternativas.

Nada de eso puede ocurrir sin conflictos, sin organización y sin una clara conciencia de las situaciones y de las tendencias de la realidad. Pero eso es, precisamente, el fondo de la cuestión: la necesidad de optar.

50 Annis y Hakim (1988) p. 209, *op. cit.*